



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

Título

Cuestiones problemáticas de la responsabilidad civil
consecuencia de ilícito penal

Autor/es

MARTA FERNÁNDEZ CORNAGO

Director/es

M^a RONCESVALLES BARBER CÁRCAMO

Facultad

Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja

Titulación

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía

Departamento

DERECHO

Curso académico

2016-17



Cuestiones problemáticas de la responsabilidad civil consecuencia de ilícito penal, de MARTA FERNÁNDEZ CORNAGO

(publicada por la Universidad de La Rioja) se difunde bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported.

Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los titulares del copyright.

© El autor, 2017

© Universidad de La Rioja, 2017

publicaciones.unirioja.es

E-mail: publicaciones@unirioja.es



**UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA**

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

**CUESTIONES PROBLEMÁTICAS DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL CONSECUENCIA DE
ILÍCITO PENAL**

MARTA FERNÁNDEZ CORNAGO

TUTORA:
RONCESVALLES BARBER CÁRCAMO

MÁSTER EN ACCESO A LA ABOGACÍA
ESCUELA DE MÁSTER Y DOCTORADO

2.016 - 2.017

RESUMEN:

La esencia del presente trabajo está constituida por el análisis jurisprudencial y eminentemente doctrinal de la responsabilidad civil que puede derivar de los daños irrogados a las víctimas de unos hechos potencialmente delictivos. Se trata de una institución de naturaleza civil, regulada esencialmente en el Código Penal. La regulación legal dual de la institución así como su carácter interdisciplinar hacen de este tipo de responsabilidad una institución particularmente compleja en nuestro ordenamiento, exigiendo ser abordada desde una perspectiva civil, penal y procesal. Las controversias surgidas en torno a la materia se proyectan en una serie de cuestiones problemáticas, que requieren ser examinadas desde un punto de vista más práctico, dada la enorme trascendencia de algunas de las últimas reformas acaecidas en nuestro ordenamiento jurídico.

Palabras clave: responsabilidad civil, responsabilidad criminal, daños, *ex delicto*, regulación legal dual, menores, personas jurídicas, prejudicialidad, prescripción.

ABSTRACT:

The objective of this essay is to analyze the jurisprudence and preeminent doctrine of civil liability that can arise from the damage incurred to victims of the potentially criminal acts. It is an institution of civil nature, essentially regulated in the Penal Code. Dual legal regulation of the institution as well as its interdisciplinary character makes this type of liability a particularly complex institution in our legal system, demanding to be addressed from a civil, penal and procedural perspective. Disputes related to the matter are projected onto a series of problematic issues that need to be examined from a more practical perspective, due to the enormous significance of some of the latest reforms in our legal system.

Keywords: civil liability, criminal liability, damages, *ex delicto*, dual legal regulation, minors, legal entities, preliminary ruling, prescription.

ABREVIATURAS

AAP	Auto de la Audiencia Provincial
AC	Repertorio de Jurisprudencia Audiencias Aranzadi
AP	Audiencia Provincial
ARP	Repertorio de Jurisprudencia Audiencias Aranzadi
art.	Artículo
BOE	Boletín Oficial del Estado
CE	Constitución Española
Cc	Código Civil
Coord.	Coordinador
CP	Código Penal
Disp.	Disposición
Exp. Motivos	Exposición de Motivos
F.D.	Fundamento de Derecho
JUR	Repertorio de Jurisprudencia Audiencias Aranzadi
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
LECrim	Ley de Enjuiciamiento Criminal
LO	Ley Orgánica
LORPM	Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor
<i>loc. cit.</i>	<i>locus citatum</i> (lugar citado)
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial
MF	Ministerio Fiscal
Nº	Número
<i>op. cit.</i>	<i>opus citatum</i> (obra citada)
RJ	Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi
ROJ	Repertorio Oficial de Jurisprudencia Cendoj
RTC	Repertorio del Tribunal Constitucional Aranzadi
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
ss.	Siguientes
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
Pág.	Página
TC	Tribunal Constitucional
TS	Tribunal Supremo
<i>Vid.</i>	Véase

ÍNDICE:

1. INTRODUCCIÓN	1
2. TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL HECHO DELICTIVO	2
2.1. Concepto	2
2.2. Antecedentes: origen y evolución histórica	3
2.3. Presupuestos	4
2.4. Fundamento jurídico y polémica ubicación legal	6
2.5. Naturaleza jurídica y carácter interdisciplinar	8
2.5.1. Planteamiento y delimitación de su naturaleza	8
2.5.2. Diferencias entre responsabilidad civil y responsabilidad criminal.....	9
2.5.3. Responsabilidad civil pura y responsabilidad civil «ex delicto»: análisis de su carácter autónomo.....	10
3. CONTENIDO Y EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL «EX DELICTO».....	12
3.1. Contenido “material” de la institución	12
3.1.1. Restitución.....	13
3.1.2. Reparación: obligaciones de dar, hacer o no hacer.....	14
3.1.3. Indemnización de los daños materiales y morales y sistema de cuantificación	16
3.2. Efectos penales del cumplimiento de la responsabilidad civil	20
4. SUJETOS RESPONSABLES Y SUJETOS BENEFICIARIOS CIVILES TRAS LA COMISIÓN DEL HECHO DELICTIVO.....	21
4.1. Sujetos civilmente responsables	21
4.2. Sujetos beneficiarios	24
4.2.1. Sujetos beneficiarios como agraviados principales	25
4.2.2. Sujetos beneficiarios como familiares y herederos de los agraviados y otros terceros perjudicados	25
5. PRINCIPALES CUESTIONES PROBLEMÁTICAS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIGUIENTE AL ILÍCITO PENAL.....	26
5.1. Responsabilidad civil derivada de delitos cometidos por menores de edad .	26
5.1.1. Planteamiento de la cuestión y contexto jurídico	26
5.1.2. Sujetos civilmente responsables.....	28

5.1.2.1. Sujetos civilmente responsables de delitos cometidos por menores de 14 años	28
5.1.2.2. Sujetos civilmente responsables de delitos cometidos por menores de entre 14 y 18 años	28
5.1.3. Tramitación del procedimiento: pieza separada de responsabilidad civil ..	31
5.2. Responsabilidad civil derivada de delitos cometidos por personas jurídicas	33
5.2.1. Planteamiento de la cuestión y contexto jurídico	33
5.2.2. Responsabilidad civil directa del delito cometido por personas jurídicas ex. art. 116.3 CP	34
5.3. Efectos del proceso penal en el ulterior proceso civil: prejudicialidad penal y cosa juzgada.....	36
5.3.1. Conclusión del proceso penal con sentencia declarando la inexistencia del hecho delictivo del que pudiera derivar responsabilidad civil	39
5.3.2. Conclusión del proceso penal con sentencia condenatoria. Cosa juzgada	39
5.3.3. Conclusión del proceso penal por absolución o sobreseimiento.....	40
5.4. Plazo de prescripción y dies a quo	41
5.4.1. Plazo de prescripción conforme a las distintas formas de finalización del procedimiento penal.....	41
5.4.1.1. Sentencia penal condenatoria sin pronunciamiento sobre la responsabilidad civil por mediar reserva de la acción civil	41
5.4.1.2. Sentencia penal condenatoria con pronunciamiento sobre la responsabilidad civil	43
5.4.1.3. Sentencia penal no condenatoria	43
5.4.1.4. Supuestos de ejecución de la condena de responsabilidad civil «ex delicto»	45
5.4.2. Dies a quo e interrupción del plazo de prescripción	46
6. CONCLUSIONES.....	48
7. JURISPRUDENCIA	51
8. BIBLIOGRAFÍA.....	52

1. INTRODUCCIÓN

El tema objeto de estudio en el presente trabajo es de una importancia indudable en nuestro ordenamiento, dado el carácter insólito de la institución. Y ello, puesto que la investigación y posterior análisis de la responsabilidad civil derivada del hecho delictivo requiere realizarse desde una perspectiva multidisciplinar –civil, penal y procesal-, pues pese a tratarse de una materia que tiene atribuida naturaleza jurídica civil, se encuentra regulada esencialmente en nuestro Código Penal. De dicho carácter interdisciplinar emanan una serie de cuestiones problemáticas que poseen una enorme trascendencia, tanto en el ámbito jurídico dogmático como práctico, siendo de importancia en este sentido las últimas modificaciones producidas recientemente en nuestra normativa actual.

La responsabilidad civil subsiguiente al ilícito penal está constituida por el conjunto de obligaciones civiles derivadas de los daños ocasionados por los hechos potencialmente delictivos. Su fin es reparar los perjuicios patrimoniales y morales provocados a las víctimas de esos delitos, situándose como una consecuencia jurídica del delito centrada en la satisfacción civil de la víctima. En este sentido, se prevé en nuestro ordenamiento el pronunciamiento en sentencia penal respecto de pretensiones de contenido civil.

En cuanto a la estructura del presente trabajo, ésta se divide en varios bloques, perteneciendo los tres primeros a la explicación dogmática de la institución, y desarrollándose en el último apartado un análisis más práctico de la misma. Así, comenzaré exponiendo la teoría general de la responsabilidad civil derivada del hecho delictivo: concepto, evolución histórica, presupuestos, fundamento jurídico en conexión con su polémica ubicación legal, y la naturaleza jurídica que se le atribuye a la misma. El estudio de dichas figuras es necesario para completar la comprensión de la institución. Continuaré explicando cuál es el contenido material de la misma, así como los efectos penales de su cumplimiento. Y posteriormente detallaré tanto los sujetos responsables como los sujetos beneficiarios de este tipo de responsabilidad. Todo esto en lo que se refiere a la explicación más teórica de la materia, cuyas peculiares características plantean una serie de problemas prácticos en nuestro ordenamiento, constituyéndose ésta como la razón de ser de la última rúbrica del presente trabajo: principales cuestiones problemáticas de la responsabilidad civil subsiguiente al ilícito penal. Es en dicho apartado en el que, mediante la investigación y análisis jurisprudencial y doctrinal, expondré las controversias relativas a la responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos por menores y por personas jurídicas, dadas las especiales características de

dichos sujetos. Analizaré también los efectos que puede irradiar el proceso penal en el subsiguiente proceso civil, y finalizaré la explicación de la materia abordando el asunto de la difícil determinación de su plazo de prescripción y *dies a quo*, consecuencia tanto del especial carácter de la institución, como de la falta de precepto específico regulador de tal efecto. Son precisamente estos problemas prácticos los que constituyen el fundamento de mi pretensión con la realización del presente trabajo: tratar de dar luz a las posibles soluciones de los mismos, mediante un acercamiento a la uniformidad de los distintos criterios imperantes entre los tribunales.

2. TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL HECHO DELICTIVO

2.1. Concepto

El innumerable conjunto de matices y peculiaridades que hacen de la responsabilidad civil derivada del hecho delictivo una institución insólita en nuestro ordenamiento, dificulta la delimitación conceptual de la misma, la cual se completará a lo largo del trabajo. Entendemos por responsabilidad civil subsiguiente al ilícito penal el conjunto de obligaciones civiles surgidas como consecuencia de los daños y perjuicios derivados de unos hechos susceptibles de ser calificados como delito. Dichas obligaciones tienen por objeto la restitución, reparación e indemnización¹ de los daños materiales y morales originados por parte del actor de los hechos delictivos a su víctima. Y este matiz conceptual es de vital importancia, pues este tipo de responsabilidad no nace directamente del delito, sino de los daños ocasionados por una conducta potencialmente delictiva. Esto es así en tanto el hecho originario de la misma es el daño civilmente resarcible, daño éste que debemos distinguir del daño penal, consistiendo el primero en las pérdidas patrimoniales y los sufrimientos irrogados a la víctima.

Para tratar de comprender un poco más esta categoría de responsabilidad civil con determinados rasgos penales, contextualicemos la figura: dentro de las consecuencias jurídicas que pueden derivar del delito, nuestro ordenamiento regula un sistema de penas -privativas de libertad, privativas de otros derechos, penas multa-, de medidas de seguridad -basadas en la idea de peligrosidad criminal-, de consecuencias accesorias -comiso,

¹.PALOMO HERRERO, Y., “La pretensión civil deducible en el proceso penal”, *Revista Jurídica de Castilla y León* n° 14, 2.008, pág. 298.

privación de beneficios...- y de responsabilidad civil derivada del delito². La diferencia principal a la que cabe hacer mención en la presente labor analítica es el hecho de que, a diferencia de la responsabilidad civil derivada del delito, el resto de consecuencias son obligaciones derivadas de la responsabilidad penal por ser directamente causadas por el delito y nacer con la condena penal.

2.2. Antecedentes: origen y evolución histórica

Si nos remontamos a la época del Derecho romano, no hallamos ninguna institución íntegramente equivalente a la responsabilidad civil «*ex delicto*» de nuestro ordenamiento, aunque sí encontramos ciertas referencias a aspectos puntuales para el caso que nos ocupa. En los comienzos de la época romana, no estaba regulada la responsabilidad civil, y en el ámbito del Derecho privado, cada cual se tomaba la justicia por su mano a la hora de buscar la reparación del daño. Con el paso de los años se comenzaron a regular determinados aspectos de la responsabilidad civil, y se introdujo el principio *alterum non laedere* como principio básico de la responsabilidad civil. Comenzaba a imperar la idea de que quien causare daño a otro debía repararlo. Esto en lo relativo a la responsabilidad civil en general, mientras que en la delimitación entre responsabilidad civil y responsabilidad criminal, en esa época, se distinguían dos categorías nacidas del daño: las derivadas de un delito público y las derivadas de un delito privado. Ya el Digesto recogía la rúbrica *de privatis delictis* en la que se refleja claramente la doble esfera -pública y privada- de la represión penal³. Durante la etapa romana no se contemplaba ninguna relación entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, y ni mucho menos claro está, una posible responsabilidad civil inherente a la propia responsabilidad penal.

Fueron Las Partidas⁴ las primeras en vislumbrar la influencia de la responsabilidad penal sobre una subsiguiente responsabilidad civil, siendo la citada la única legislación entonces vigente que contemplaba el caso de una responsabilidad civil concurrente con la criminal. Pero no fue hasta el año 1.822 cuando se reguló de forma específica la responsabilidad civil derivada del delito, con la aprobación del primer Código Penal

² RUIZ BOSCH, S., “La prescripción de la responsabilidad civil derivada del delito”, *Noticias Jurídicas*, (disponible en <http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4876-la-prescripcion-de-la-responsabilidad-civil-derivada-del-delito/> , fecha de consulta: 13/12/2016 a las 18:21 h).

³ FUENTESECA DEGENEFEE, M., “Poena privata, poena criminis y responsabilidad civil derivada del delito”, en CALZADA GONZÁLEZ, A., CAMACHO DE LOS RÍOS, F., (Coords.), *El derecho penal: de Roma al derecho actual*, Edisofer, Madrid, 2.005, pág. 254.

⁴ NAVARRO MENDIZÁBAL, I.A., VEIGA COPO, A.B., *Derecho de daños*, Civitas, Pamplona, 2.013, pág. 49.

español. Dicha normativa penal surgida con ánimo de modernidad, se complementaba en los aspectos civiles con Las Partidas, por ser ésta la legislación civil del momento, cuyo origen se sitúa en el régimen feudal⁵. Ello justifica que en ese primer CP de 1.822 se recogieran unos cuantos artículos concernientes al Derecho civil, los relativos a la responsabilidad civil derivada del delito, pues no fue hasta 1.889 cuando se promulgó el primer Código Civil español. Dichos antecedentes legislativos son relevantes, por cuanto han sido la justificación recurrida por parte de la doctrina para dar respuesta al particular escenario jurídico inducido por la regulación legal dual de la institución.

Desde otra perspectiva radicalmente distinta -desde la finalidad perseguida por la responsabilidad civil «*ex delicto*»- y atendiendo no tanto a su origen legislativo, algunos autores sitúan su origen en el momento de surgimiento de la ciencia social y criminológica conocida como «*victimología*». Y ello, en tanto la esencia de dicha disciplina está constituida por el estudio de la víctima que sufre los daños de los delitos, objetivo coincidente con el perseguido por la institución objeto de este trabajo, considerando incluidas como víctimas no solo el sujeto pasivo directo del delito, sino también el resto de personas naturales o jurídicas que han podido sufrir daños derivados del hecho delictivo⁶.

2.3. Presupuestos

Si bien el presupuesto de este tipo de responsabilidad no es el delito en sí sino los daños ocasionados por dicho hecho ilícito susceptible de ser declarado delito, dichos daños deben reunir una serie de requisitos para dar lugar a tal responsabilidad. En este sentido, la mayor parte de la doctrina, tanto civilista como penalista, reduce a tres los presupuestos coetáneos necesarios para el surgimiento de la responsabilidad civil derivada del ilícito penal en cada caso, deduciéndose éstos de lo expuesto por FERNÁNDEZ CREMADES en:

1. El comportamiento por acción u omisión tipificado como delito por el Código Penal,
2. la producción del daño, y

⁵ *Ibidem*.

⁶ SAMPEDRO ARRUBIA, J.A., “¿*Quiénes son las víctimas del delito? La redefinición del concepto desde la victimología*”, Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, vol. 21, nº 67, 1.999, págs. 153-154.

3. la relación de causalidad entre el comportamiento ilícito y la producción del daño, entendida no sólo como una relación de causalidad natural, sino también como una relación de causalidad adecuada determinada mediante criterios normativo-jurídicos de imputación objetiva⁷. Dicha relación de causalidad entre los hechos ilícitos realizados y los resultados dañosos y perjudiciales es condición *sine qua non* para la condena por esta responsabilidad civil, y así ha venido entendiéndolo la jurisprudencia. Por todas, STS 18 marzo 2.000.

A propósito de lo anterior, cabe precisar que la condena a reparar un daño causado por el potencial delito no requiere, que exista -en todo caso- una condena penal por delito⁸. En lo relativo a la relación requerida entre el daño indemnizable y el hecho penalmente típico para que pueda hablarse de “responsabilidad civil derivada de delito” encontramos tres hipótesis, enunciadas por SILVA SÁNCHEZ:

1. La responsabilidad civil derivada de delito solo se refiere a los daños que se manifiestan en el resultado típico del delito,
2. La responsabilidad alcanza a daños trascendentes al resultado típico, pero, en todo caso, imputables a la conducta típica según las reglas de imputación objetiva.
3. La responsabilidad civil va incluso más allá de la reparación de los daños objetiva y subjetivamente imputables a la conducta típica en los términos de Derecho civil de daños⁹.

De entre ellas, ligeramente la segunda y en esencia la tercera, han sido la idea por la que se han inclinado los tribunales en sus resoluciones, cuya motivación podemos sintetizar en la idea de que no se requiere que el daño causado por el delito sea un daño penalmente típico.

Cabe mencionar como aspecto relevante, y en relación con lo expuesto anteriormente, que puede existir responsabilidad civil derivada de un delito aún no existiendo condena penal, pues las causas de exención de la responsabilidad penal no conllevan siempre la exención de la responsabilidad civil¹⁰ -excepto aquellas causas de exención que por ser

⁷ FERNÁNDEZ CRENDE, A., “Imputación objetiva en un caso de responsabilidad civil ex delicto: criterio de la provocación: Comentario a la STS, 2ª, 26.9.2005”, *InDret n° 1*, 2.006, Barcelona, pág. 3.

⁸ SILVA SÁNCHEZ, J.M., “¿”Ex delicto”? aspectos de la llamada “responsabilidad civil” en el proceso penal”, *InDret n° 3*, Barcelona, 2.001, pág. 3.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ GRANADOS PÉREZ, C., “Daño civil derivado de delito”, en MORENO MARTÍNEZ, J. A. (coord.) *et al.: La responsabilidad civil y su problemática actual*, Madrid, Dykinson, 2.007, Pág. 362

actuaciones amparadas en Derecho, conllevan además de la exención responsabilidad criminal, la exención de la civil, como ocurre en los supuestos de legítima defensa-. Entre las razones de exención de responsabilidad penal se regulan: muerte del reo, cumplimiento de condena, remisión definitiva de la pena, indulto, perdón del ofendido, prescripción, determinados motivos de inimputabilidad, inculpabilidad y otro tipo de causas propias de estudio en la teoría general del Derecho penal. Y cabe hacer referencia también, a la existencia de delitos sin responsabilidad civil, haciéndose necesario para su surgimiento que el acto penalmente ilícito ocasione sobre el agraviado u otros perjudicados unos daños económicamente cuantificables. Es decir, puede darse una responsabilidad civil sin existir condena por responsabilidad penal, y puede existir condena penal sin llevar aparejada una responsabilidad civil derivada de la misma. Pero hay que advertir en este sentido que, fuera de los casos en que la ley autorice la declaración de una responsabilidad civil sin previa condena penal, la responsabilidad civil por razón de delito debe presuponer la existencia y estimación de una infracción punible¹¹.

2.4. Fundamento jurídico y polémica ubicación legal

Es de destacar respecto de este tipo de responsabilidad su peculiar ubicación legal dual, la cual aporta un plus de complejidad a la materia, recogiendo la normativa al respecto tanto en la legislación civil como en la penal. Es dicha regulación divergente la que, entre otros factores, ha dado lugar a las cuestiones problemáticas de la responsabilidad civil derivada del hecho delictivo, consecuencia lógica emanada de la posibilidad de remisión a fuentes normativas tan dispares. La solución para afrontar dicha inusitada ubicación legal se deduce de la legislación: la responsabilidad civil «*ex delicto*» debe regirse por el CP, y solo de manera supletoria deberá acudir a las normas civiles, pues así se infiere del párrafo tercero del art. 984 LECrim y del 1.092 Cc. Y así ha venido siendo unánimemente declarado por la jurisprudencia, tal como se concluye del contenido de la STS de 13 de octubre de 2.015.

Enunciada dicha complejidad normativa, la regulación sustantiva de la institución queda establecida en los artículos 109 a 122, 125, 126 CP y 1.089 y 1.092 Cc. Así, la

¹¹ “Responsabilidad civil derivada del delito”, *La ley Penal nº 9 Sección Monografías de Jurisprudencia*, 2.004, pág. 2. (disponible en <http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAEAMtMSbF1jTAAA2MjMxO1stSi4sz8PFsjAwMTA0sDI5BAZlqlS35ySGVBqm1aYk5xKgAugylbNQAAAA==WKE>, fecha de consulta: 04/11/2016 a las 16:32 h).

referencia legal más específica de la responsabilidad civil en el CP la encontramos en su art. 109 CP, al fijar la obligación de reparar los daños y perjuicios causados por la ejecución de un hecho descrito como delito, en los términos previstos en las leyes. Y continúa su regulación a lo largo de todo el capítulo segundo, cuyos preceptos irán siendo desgranados en los pertinentes apartados de este trabajo. El anterior precepto guarda estrecha relación –yo diría que actúan complementariamente– con el art. 1.089 Cc, el cual califica los actos y omisiones ilícitas como fuente de obligaciones.

Otra referencia clara la encontramos en el art. 116 LECrim al disponer que

la extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil, a no ser que la extinción proceda de haberse declarado por sentencia firme que no existió el hecho de que la civil hubiese podido nacer. En los demás casos, la persona a quien corresponda la acción civil podrá ejercitarla, ante la jurisdicción y por la vía de lo civil que proceda, contra quien estuviere obligado a la restitución de la cosa, reparación del daño o indemnización del perjuicio sufrido.

Además el art. 112 de la misma ley también regula el ejercicio de la acción civil inherente al ejercicio de la acción penal, a no ser que opte el perjudicado por la renuncia o reserva de la acción.

Las mencionadas reseñas normativas son quizás las más destacables en la materia, si bien pueden hallarse otras referencias legales de menor trascendencia para visibilizar lo singular de su regulación, y la necesidad de un análisis multidisciplinar –civil, penal y procesal–. Algunas de las referencias legales de su ámbito procesal se encuentran en el art. 100, 112 y 989.1 LECrim, precepto éste que remite a la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular la institución.

No son pocas las críticas doctrinales recibidas por esta singular regulación dual, si bien ha tratado de ser justificada mediante argumentos basados en razones legislativas históricas, y otros basados en razones de economía procesal¹², en tanto evita acudir a dos procesos diferentes, de tal modo que la ubicación en la normativa penal facilita la tarea a los tribunales penales. Como es lógico, las razones históricas no son contempladas como una justificación suficiente para algunos autores que, como la civilista SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, sostienen que no es posible afirmar a estas alturas que sean razones históricas o de simple respeto a la tradición de nuestros códigos las que llevan a

¹² PALOMO HERRERO, Y., “La pretensión civil...”, *loc. cit.* pág. 296.

regular en el CP este articulado¹³. En este sentido cabe apuntar que no son pocos los *iusprivativistas* que observan una incorrección en relación con su *nomen iuris* y, por ende creen necesaria su ubicación en el Código civil¹⁴.

2.5. Naturaleza jurídica y carácter interdisciplinar

2.5.1. Planteamiento y delimitación de su naturaleza

A modo de titular, la mayor parte de la doctrina –civilista, penalista y procesalista- se ha decantado por la naturaleza civil de la institución, si bien nadie duda de la enorme trascendencia de sus aspectos civiles en el ámbito del Derecho Penal. Así planteada, parece no ser una cuestión demasiado compleja, sin embargo la misma ha dado lugar a un tratamiento doctrinal y jurisprudencial no carente de controversias. Así pues, un sector minoritario y más clásico de juristas defendió la naturaleza penal de la responsabilidad civil delictual mediante argumentos tales como: la existencia de un régimen “*ad hoc*” en el Código Penal, el hecho de que traiga causa del delito, y la hipotética función restauradora atribuida al Derecho penal buscando el restablecimiento de los daños irrogados a la víctima¹⁵.

La doctrina considera que toda responsabilidad derivada de un daño -entendido éste como perjuicio que puede derivar de incumplimiento de contrato o de acciones u omisiones generadas sin una previa relación contractual u obligacional- da lugar a acciones de responsabilidad civil, aunque estas últimas merezcan calificación de delito. En relación con lo anterior, la responsabilidad puede ser por un lado civil, cuando deriva de un contrato -responsabilidad contractual-, o cuando deriva de la violación de un principio *neminem laedere* -responsabilidad extracontractual-. Y por otro lado, tenemos la responsabilidad criminal, siendo éste un tipo de responsabilidad estudiada desde el ámbito penal del Derecho. Pues bien, dentro de la responsabilidad civil, de modo particular prevé nuestro ordenamiento una subdivisión de modalidades: responsabilidad civil pura y responsabilidad civil derivada del delito¹⁶, con el otorgamiento del carácter civil a su naturaleza jurídica por la mayoría de la doctrina. Nótese además, que nuestro Cc impone el sometimiento a las disposiciones del CP de aquellas obligaciones civiles nacidas de los

¹³ SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, M.B., *La reparación del daño ex delicto. Entre la pena privada y la mera compensación*, Comares, Granada, 1997, pág. 2.

¹⁴ HORTAL IBARRA, J., “La naturaleza jurídica de la responsabilidad civil ex delicto: o cómo “resolver” la cuadratura del círculo”, *InDret* n° 4, 2.014, pág. 8.

¹⁵ HORTAL IBARRA, J., “La naturaleza jurídica...”, *loc. cit.*, págs. 10 y 11.

¹⁶ NAVARRO MENDIZÁBAL, I.A., VEIGA COPO, A.B., *Derecho de Daños*, Civitas, Pamplona, 2.013, pág. 22.

delitos o faltas –delitos leves tras la reforma de la LEC en 2.015-. Es decir, se reconoce la naturaleza civil de la institución regulada en el Cc, y se desarrollan esos aspectos civiles en el CP, reconociendo dicho texto penal también la naturaleza civil de la misma al disponer que la obligación de restituir, reparar el daño e indemnizar los perjuicios, se transmite a los herederos¹⁷ del responsable. Además, la responsabilidad civil nacida de delito se extinguirá de igual modo que las demás obligaciones, con sujeción a las reglas del Derecho civil. Podemos deducir entonces que para ambos Códigos, se trata de una consecuencia civil nacida del delito, pues el daño causado por éste origina la responsabilidad correspondiente¹⁸.

Así las cosas, el hecho de que tal responsabilidad trae causa del daño civil es elemental para otorgar carácter civil a su naturaleza jurídica, de modo que el hecho de que el comportamiento que lo motiva sea o no delito en nada alteraría la naturaleza civil de la obligación reparadora¹⁹. Ahora bien, ese hecho delictivo motivador del daño otorga, a mi modo de ver, ciertas peculiaridades que si bien no destruyen la naturaleza civil de la misma, sí la singularizan como categoría independiente respecto de otras modalidades de responsabilidad civil, cuestión ésta que trataré de esclarecer *infra*.

2.5.2. Diferencias entre responsabilidad civil y responsabilidad criminal

Para entender un poco mejor la situación procedo a exponer las principales diferencias entre ambos tipos de responsabilidad. Como sabemos la responsabilidad criminal -personalísima del autor del hecho- es el mecanismo mediante el cual la sociedad se defiende contra los hechos que le causan daño, o que amenazan el orden en que está establecida, con el fin de impedir que esos actos se cometan o se repitan, siendo el Estado quien castiga a los autores de esos hechos ilícitos²⁰. En la responsabilidad criminal generalmente no suele importar el daño causado a la víctima, mientras que la responsabilidad civil parte no de un perjuicio social, sino del daño al sujeto pasivo del delito, no fijándose en la represión del autor, y su sanción, sino en la satisfacción e

¹⁷ SÁNCHEZ JORDÁN, M.E., “Problemas de la responsabilidad civil “por delito””, *Revista jurídica de Navarra*, nº 11, 1.991, pág. 171.

¹⁸ ROJAS RAMÍREZ, G., “La responsabilidad civil derivada del delito”, GestioPolis, “”, 2.014, (disponible en <http://www.gestiopolis.com/la-responsabilidad-civil-derivada-del-delito/>, fecha consulta: 14/11/2.016 a 17 h).

¹⁹ YZQUIERDO TOLSADA “La responsabilidad en el proceso penal”, en REGLERO CAMPOS (coord.), *Tratado de responsabilidad civil I*, Aranzadi, Cizur Menor, 2.008, pág. 1071.

²⁰ GONZÁLEZ-ALEGRE BERNARDO, M., “La responsabilidad civil en el proceso penal; algunos ejemplos prácticos de su evaluación a través de sentencias de Audiencia Provincial de Albacete” *Anales de la Universidad de Murcia*, vol. XVII, nº 3, 1.980, págs. 221 y 222.

indemnización de la víctima. Es decir, de modo quizás aún más concreto que su finalidad, su distinción radica en los sujetos que fundamentan la base de su existencia, esto es, una responsabilidad criminal centrada en el agresor *versus* una responsabilidad civil centrada en la víctima. Lo que no deja lugar a dudas es que ambas, responsabilidad criminal y civil, son instituciones independientes aunque confluyentes en aspectos concretos, como ocurre en el caso de la responsabilidad civil derivada del delito.

Pues bien, pese a lo complejo de su carácter interdisciplinar y pese a la encrucijada en la que nos sitúa su regulación legal dual, podemos concluir con la consideración civil de la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil consecuencia del hecho delictivo, sintetizando los argumentos empleados por la doctrina mayoritaria para atribuir tal carácter, a la que se adhiere DE LA FUENTE HONDARRUBIA²¹, en las siguientes consideraciones:

- Primera: la pena, como castigo condicionado al hecho culpable, posee carácter personalísimo, mientras que la sanción civil, con su fin de reparar el daño económicamente cuantificable, es transmisible a terceros. De ello, y de la distinción entre sujeto pasivo y perjudicado, deriva la posibilidad de quien no es sujeto pasivo directo de exigir la reparación del daño.
- Segunda: la pena persigue unos objetivos sancionadores, a la par que preventivos, lo cual determina su graduación. En contra, la exigencia de responsabilidad civil –aunque también puede tener efectos inhibidores- pretende objetivos compensatorios, indemnizatorios.
- Tercera: la pena está orientada a la protección del interés público, de cuya labor se encarga el Estado, mientras que la sanción civil responde a un interés privado, pudiendo el perjudicado ejercitar o renunciar a sus derechos, debido al carácter dispositivo de la acción civil, siempre claro está no perjudique el interés general o a terceros.

2.5.3. Responsabilidad civil pura y responsabilidad civil «ex delicto»: análisis de su carácter autónomo

Asentada la idea de considerar la responsabilidad civil derivada de delito como una institución de naturaleza jurídica civil, la encrucijada la situamos ahora en diferenciar

²¹ DE LA FUENTE HONDARRUBIA, F., “La responsabilidad civil del delito. Especial consideración de las personas jurídicas y entes jurídicos colectivos”, *AFDUA*, 2.003, pág. 229.

entre responsabilidad civil pura y responsabilidad civil «*ex delicto*», en tanto habrá que determinar si la segunda debe considerarse de forma independiente y autónoma o si por el contrario, debe encuadrarse en alguna de las formas de responsabilidad civil general de nuestro Derecho de daños. En este sentido, algunos autores señalan que, existiendo efectos penales de la satisfacción de la responsabilidad civil, la naturaleza (fundamento y función) no es ya puramente civil²², -presupongo que la consideración de no puramente civil no excluye la consideración de responsabilidad civil desde una perspectiva menos pura-.

Bien, en este caso, a diferencia de lo que sucedía entre responsabilidad civil y criminal, el fin perseguido por la responsabilidad pura y la derivada del delito es el mismo: reparar el daño causado. Sin embargo, la fuente obligacional es distinta en cada uno de los casos. Al respecto, GALIANA URIARTE, y otra gran parte de la doctrina civilista defienden la identidad de caracteres jurídicos entre la responsabilidad civil derivada del delito y la responsabilidad general objeto de estudio en el Derecho Privado. Consideran que no existe ninguna diferencia entre ellas salvo su punto de origen, el acto que las determina²³. Y digo yo, ¿el hecho de ser el fundamento fáctico del que deriva el nacimiento de una y otra categoría de responsabilidad un acto con condiciones y caracteres tan diferenciados, no es suficiente motivo para no resignarnos a considerar ambas de forma unitaria?

No son pocos los autores que consideran acertado equiparar la responsabilidad civil «*ex delicto*» como una modalidad de extracontractual, y ello por entender que se aproxima en sus principios y fundamentos a la propia configuración civil de la responsabilidad por daño²⁴. En este sentido, explica PANTALEÓN PRIETO que es improcedente referirse a la responsabilidad civil derivada de delito como algo diferente a la responsabilidad extracontractual, en tanto que ambas persiguen un fin indemnizatorio, y se apoyan en el mismo fundamento²⁵. La misma opinión sostiene YZQUIERDO TOLSADA, quien expone que la mal llamada responsabilidad civil derivada de delito y la responsabilidad civil pura son lo mismo, ya que en nuestro ordenamiento solo existen dos tipos de responsabilidad civil: contractual y extracontractual. Así, el hecho de que haya

²² QUINTERO OLIVARES, G., *La responsabilidad civil y la reparación en la política criminal contemporánea*, al que hace referencia MÁRQUEZ DE PRADO PÉREZ, J., en *Responsabilidad civil “ex delicto”*, Consejo General del Poder Judicial: Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 2005, págs. 24.

²³ GALIANA URIARTE, F., “Problemas de la responsabilidad delictual: el tercero perjudicado”, *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, tomo 19, 1.996, pág. 200.

²⁴ NAVARRO MENDIZÁBAL, I.A., y VEIGA COPO, A.B., *Derecho de Daños...* op. cit., pág. 47.

²⁵ PANTALEÓN PRIETO, A.F., “Comentario a la STS de 13 julio de 1984”, al que hace referencia SÁNCHEZ JORDAN, M.E., en “Problemas de la llamada...”, *loc. cit.*, pág. 161.

además delito en el acto motivador no perturba la naturaleza de la obligación de resarcimiento²⁶. Sin embargo, como oportunamente apunta SÁNCHEZ SILVA, desde un punto de vista descriptivo, atendiendo al contenido de los pronunciamientos jurisprudenciales, se dictan resoluciones en no pocas ocasiones difícilmente reconducibles en la práctica a la categoría de responsabilidad civil extracontractual²⁷. Lo importante no es clasificar el tipo de responsabilidad en meros términos dogmáticos sino exponer las consecuencias prácticas de tal delimitación: la conveniencia o no de aplicar los preceptos previstos para la responsabilidad extracontractual cuando los daños que se pretenden reparar derivan de un hecho delictivo. Ello se refleja en la fijación del plazo de prescripción de la acción de resarcimiento de dichos daños. Pues bien, si casi todos los autores coinciden en la carencia de previsión específica de dicho plazo de la responsabilidad civil derivada de hecho delictivo, y regulando el 1.968.2 Cc de forma expresa el plazo de la extracontractual, ¿no es cierto que la deducción obvia es que no encaja la responsabilidad civil «*ex delicto*» como extracontractual? Y así, no existiendo plazo específico, nos encontramos ante un tercer género²⁸ de responsabilidad civil.

3. CONTENIDO Y EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL «EX DELICTO»

3.1. Contenido “material” de la institución

En coherencia con la idea defendida a lo largo de este trabajo relativa a la satisfacción de la víctima como razón de ser de la responsabilidad civil derivada del hecho delictivo, es lógico atender a sus necesidades a la hora de fijar el contenido de la misma. Pues bien, para el estudio del contenido de este tipo de responsabilidad, y atendiendo a su objetivo, se deberá tratar de reponer la situación al estado anterior a la comisión del delito. Habrá que analizar entonces cuáles son las formas previstas en nuestro ordenamiento para lograr tal fin. Siendo ésta una cuestión pacífica para la doctrina –pues poco lugar a dudas deja lo dispuesto por el art. 110 CP²⁹–, el contenido de la responsabilidad civil derivada de la comisión del delito está constituida por tres figuras, las cuales podrán darse de forma complementaria o no, constituyéndose la esencia de cada una de ellas por una serie de

²⁶ YZQUIERDO TOLSADA, M., *Aspectos civiles del nuevo Código Penal: responsabilidad civil, tutela del derecho de crédito, aspectos de derecho de familia y otros extremos*, Dykinson, Madrid, 1.997, pág 33.

²⁷ SILVA SÁNCHEZ, J.M., “¿”Ex delicto”? aspectos...”, *loc. cit.*

²⁸ QUINTERO OLIVARES, G., CAVANILLAS MÚGICA, S., DE LLERA SUÁREZ-BARCENA, E., *La responsabilidad civil «ex delicto»*, Aranzadi, Cizur Menor, 2.002, pág. 135.

²⁹ A este respecto dispone el art.110 CP: “La responsabilidad establecida en el artículo anterior comprende: 1. ° La restitución, 2. ° La reparación del daño, 3. ° La indemnización de perjuicios materiales y morales”.

cualidades que las diferencian entre sí. Estas tres instituciones son: la restitución (111 CP), la reparación (112 CP) y la indemnización (113 CP).

3.1.1. Restitución

La restitución en el ámbito de la responsabilidad civil derivada de delito consiste, tal como se deduce de la literalidad del precepto, en reponer el mismo bien objeto del ilícito penal. Esto es, la devolución al perjudicado por parte del responsable, de la misma cosa de la cual fue privado por el delito, ello siempre y cuando fuere posible, incluso cuando dicho bien se halle en poder de un tercer adquirente de buena fe.

Previo adentrarme en su explicación, cabe precisar que la restitución solo podrá llevarse a efecto cuando nos encontremos ante delitos cuya consumación consista en privar de una cosa a la víctima, generalmente delitos cuyo bien jurídico protegido sea el patrimonio y el orden socioeconómico -por ejemplo, delito de hurto (234 CP)-, de robo (237 CP), de apropiación indebida (253 CP), de estafa (248 CP)-, debiendo incluirse el abono de los deterioros o menoscabos sufridos por la cosa objeto de delito³⁰. La interpretación que la mayoría de la doctrina hace de los preceptos del CP relativos a la restitución, conduce a atribuir a la misma carácter preferente sobre las otras dos formas de reparación, si bien es cierto –retomando la matización señalada anteriormente- que ésta no siempre será posible, como ocurre en los delitos de peligro en abstracto, o de modo más gráfico, en los delitos con resultado de muerte. Dicho carácter preferente tiene como consecuencia la pérdida de elección de la víctima sobre cuál es la forma con la que desea ser reparado, de modo que si es posible restituir el mismo bien no será posible que el perjudicado pretenda una compensación en efectivo de dicho bien –sin perjuicio de la pertinente indemnización-. Cabe señalar aquí que quizás sea ésta la característica principal de la restitución, el hecho de que pretende dejar intacto el patrimonio de la víctima, a diferencia de las otras dos modalidades de reparación cuya pretensión es la compensación del daño ocasionado por el hecho delictivo³¹.

Y cabe hacer mención a la excepción de lo anterior en aquellos casos en que el bien objeto del delito se encuentre en posesión de un tercer adquirente de buena fe –vemos aquí una clara referencia a la normativa civil-, casos éstos en los que aparentemente no podría hacerse efectiva la restitución. Respecto de ello, la interpretación unánime de la ley

³⁰ YZQUIERDO TOLSADA, M., *Aspectos civiles...*, op. cit. pág. 82.

³¹ ROCA DE AGAPITO, L., “La prescripción de la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Valoración crítica de la Ley 42/2.015, de 5 de octubre”, *Diario La Ley* nº 8.675, 2.016.

entiende que ésta atribuye la obligación de restituir, no al autor del delito sino a quien posea el objeto en el momento en que la restitución deba hacerse efectiva. Y claro, jueces y fiscales se plantean lo siguiente: si a un adquirente de buena fe se le obliga a restituir la cosa objeto de un delito, ¿no debe considerarse a ese adquirente como perjudicado por dicho delito? Y si esto es así, ¿tendrá derecho entonces a una sentencia penal donde se le reconozca derecho de indemnización como tercero perjudicado por el delito o deberá dirigirse a las vías civiles para reclamar su derecho?³² A este respecto me parece bastante acertada la solución planteada por parte de la doctrina, la cual opina que no debe reconocérsele indemnización al adquirente de buena fe en el proceso penal como tercero perjudicado por el delito, en tanto ese perjuicio no deriva del delito, sino de la condena³³ civil a la que da lugar el mismo. Ello tiene como consecuencia la necesidad del adquirente de buena fe de acudir a la jurisdicción civil, hecho éste que me parece lógico pues resultaría enormemente complejo para el juez penal interpretar preceptos y resolver sobre instituciones pertenecientes al más puro Derecho Civil como pueden ser las referidas a los menoscabos y deterioros con los que se hubiere enriquecido (1.897 Cc); a los frutos producidos durante el tiempo en que el objeto se encuentra bajo su posesión (451 - 456 Cc); a la extinción de la obligación por no mediar culpa del deudor (1.182 Cc); a la restitución en caso de saneamiento por evicción (1.478 Cc)...

3.1.2. Reparación: obligaciones de dar, hacer o no hacer

La reparación prevista en el 112 CP hace referencia a las subsanaciones del perjuicio ocasionado por el delito, tanto en forma específica como pecuniaria, tratando de restablecer el equilibrio en el patrimonio del perjudicado. Ésta cobrará mayor importancia en unos delitos que en otros, por ejemplo, en los delitos de propiedad intelectual o derecho al honor, para los cuales se prevé como medida de reparación del daño la publicación de la sentencia condenatoria. Otros ejemplos de reparación son: restaurar el equilibrio ecológico perturbado en los delitos contra el medio ambiente; restaurar la situación dañada en los delitos sobre la ordenación del territorio; o restaurar una casa, un objeto o un lugar³⁴.

Dispone el artículo 112 CP que la reparación podrá consistir en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, debiendo ser el juez en cada caso quien, atendiendo a la naturaleza

³² YZQUIERDO TOLSADA, M., *Aspectos civiles...*, op. cit. pág. 93.

³³ *Ibidem*, pág. 94.

³⁴ GRANADOS PÉREZ, C., "Daño civil derivado...", loc. cit., pág. 362

del daño y las particulares condiciones personales y patrimoniales del responsable, se encargue de concretar la misma, determinando si deben ser cumplidas por él o ejecutadas su costa. Pues bien, al deducirse del precepto tres tipos de obligaciones destinadas a la reparación del daño, veo necesario explicar a continuación las diferencias entre cada una de ellas, tratando de esclarecer dicha distinción mediante algunos ejemplos.

El primer tipo de obligaciones -de dar- no da lugar a demasiadas dudas, entendiéndose por estas las constituidas por la entrega de cosa cierta, sea o no cantidad de dinero. Encontramos una referencia al respecto en el art. 1.185 Cc, que establece que cuando la deuda de cosa cierta y determinada proceda de delito no se eximirá al deudor del pago de su precio, salvo que la ofrezca al perjudicado y éste, sin razón, se niegue a aceptarla³⁵.

Las segundas, obligaciones de hacer -*obligationes faciendi*³⁶- parecen estar menos ajenas a cavilaciones. Uno de los puntos candentes de este tipo de obligaciones surge del tenor literal del precepto, al disponer el art. 112 CP: *...atendiendo a la naturaleza de aquél y a las condiciones personales y patrimoniales del culpable*. Quizás hubiese sido más adecuado sustituir el término «culpable» por «responsable civil», «obligado» o «deudor principal», pues el término culpable conlleva una serie de connotaciones penales las cuales no tiene mucho sentido que entre a apreciar el Derecho Civil³⁷. Y en este sentido, recordemos además que se puede ser responsable civil tras la comisión de un ilícito penal sin la necesidad de ser declarado culpable criminalmente, como ya ha quedado explicado en el apartado relativo a los presupuestos de la responsabilidad civil derivada de hecho delictivo.

Otro de los aspectos controvertidos relativos a las obligaciones de hacer deriva de la que podemos llegar a calificar como contradicción de normas civiles y penales. Concretamente, el art. 1.098 Cc establece que si el obligado a hacer alguna cosa no la hiciere se mandará ejecutar a su costa, lo mismo que si la hiciere contraviniendo el tenor de la obligación, pudiendo además decretarse deshacer lo mal hecho. Es decir, sitúa al causante en una posición preferente a la hora de reparar el daño, y solo en defecto de éste la ejecución se realizará por un tercero a costa del obligado principal. Paralelamente, el

³⁵ “Responsabilidad civil”, (disponible en:

<http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAEAMtMSbFIjTAA AUMTAIMTtbLUouLM DxbIwMDCwNzAwuQOGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoASyB-4jUAAAA=WKE>, fecha de consulta: 23/11/2.016 a las 18:24 h).

³⁶ HALLEBEEK J., “Cumplimiento forzoso de las obligaciones de hacer. Dos ejemplos de la tradición romanística”, *Glossae: European Journal of Legal History* n° 10, 2.013, pág. 216.

³⁷ YZQUIERDO TOLSADA, M., *Aspectos civiles...op. cit.* pág. 104.

112 CP deja claro que será el juez quien determine en cada caso concreto si debe realizar la obligación de hacer el deudor principal o un tercero a costa de aquel³⁸.

Siguiendo con lo anteriormente expuesto, fijándonos en ese último inciso del 112 CP, respecto de la necesidad de delimitar sobre quién recae la obligación de reparación, parece lógico afirmar, como acertadamente hace MARTÍN RÍOS, que primeramente siempre y cuando fuere posible deberá favorecerse la reparación por parte del propio culpable, dejando la ejecución forzosa o la intervención de terceros solo para aquellos supuestos en los que no pueda llevarse a efecto la primera opción, pues aunque el resultado es el mismo, siempre parece mejor lograr la reparación de forma voluntaria y personal, lo cual además reporta mayor satisfacción a la víctima³⁹ –reflejo de la posición de la víctima como centro en su análisis de la cuestión-.

Por último, sobre las obligaciones de no hacer poco se puede decir, o mejor dicho, poco ha dicho la doctrina al respecto más allá de la crítica dirigida al hecho ilógico de tomar una obligación de no hacer como método de reparación cuando ésta más bien parece servir como apunta YZQUIERDO TOLSADA, para evitar daños futuros o la persistencia de una conducta dañosa continuada, pero en ningún caso para resarcir el daño ya ocasionado⁴⁰. Pero no he querido resignarme a admitir como válida tal apreciación -al menos no sin antes analizarla más detalladamente- que tanto valor quita, si bien no en la práctica, a la labor de nuestro legislador. En este sentido, las justificaciones que he tratado de inquirir rondan en torno a la idea de situar a la víctima como centro y fundamento de la reparación, encontrando así cierta justificación en la finalidad de satisfacción de la víctima, quien tendrá así la seguridad de que el daño irrogado cesará y no se repetirá.

3.1.3. Indemnización de los daños materiales y morales y sistema de cuantificación

Se encuentra regulada en el art. 113 CP y tiene por objeto la compensación económica -mediante el pago de una cantidad determinada de dinero- de los daños tanto materiales como morales ocasionados por el delito. Viene determinada por el daño emergente y el lucro cesante, consistiendo dichos daños en una disminución de valor económico, jurídico o personal⁴¹, tanto en el patrimonio presente como en el futuro. Dicha indemnización es la

³⁸ *Ibídem*, pág. 98.

³⁹ MARTÍN RÍOS, M.P., *El ejercicio de la acción civil en el proceso penal: una aproximación victimológica*, La Ley, Madrid, 2.007, pág. 46.

⁴⁰ YZQUIERDO TOLSADA, M., *Aspectos civiles...* op cit., pág. 107.

⁴¹ GRANADOS PÉREZ, C, *Responsabilidad civil ex delicto*, La Ley, Madrid, 2.010, pág. 85.

forma de reparación que cuenta con mayor desarrollo doctrinal y jurisprudencial, pues en su estudio se incluyen factores como la relación de causalidad entre el hecho delictivo y el daño, el sistema para la valoración del daño, la ampliación del círculo de sujetos a los que la misma beneficia⁴²—materia ésta abordada en un apartado posterior del presente trabajo—, y la necesidad de cuantificación de la misma atendiendo a criterios no siempre uniformes.

Entrando ahora en el análisis del fundamento de la indemnización, esto es, los daños materiales y morales que la originan, podemos definir los primeros como aquellos que directa o indirectamente repercuten en el patrimonio del agraviado. Son por tanto, aquellos que suponen una disminución patrimonial para la víctima perfectamente cuantificable económicamente. Por otro lado, los daños morales, son por contraposición, los daños no patrimoniales, y se identifican con sufrimiento o dolor, indemnizándose como *pretium doloris*. Este segundo tipo de daños plantea bastantes más problemas analíticos de cuantificación⁴³, respecto de los primeros.

Otra distinción destacable es la existente entre daños directos e indirectos, entendiendo los segundos como aquellos generados a consecuencia de un hecho dañoso producido en sujeto distinto al que había sufrido las consecuencias directas del mismo, carácter subjetivo éste que no conlleva especial problemática⁴⁴.

El art. 115 CP establece que los jueces y tribunales, al declarar la existencia de responsabilidad civil, establecerán razonadamente en sus resoluciones las bases en las que fundamenten la cuantía de los daños e indemnizaciones. Así lo recuerda el contenido de gran número de sentencias del TS, como la STS de 27 de junio de 2.000, STS de 12 de noviembre de 2.001, y STS de 24 de septiembre de 2.002⁴⁵. Pero la determinación de la cuantía correspondiente no es un tema libre de complejidades, dificultad cuantificadora ésta cuya causa podemos situar en la escasa uniformidad de criterios legales establecidos para su valoración. Ello nos lleva a acudir en la mayoría de casos a criterios jurisprudenciales, si bien los tribunales tampoco han venido siguiendo una línea pacífica al respecto. Prácticamente la fijación del *quantum* indemnizatorio es una materia dejada

⁴² ROCA DE AGAPITO, L., “La prescripción de la responsabilidad...”, *loc. cit.* pág. 3.

⁴³ PINTOS AGER, J., *Baremos, seguros y Derecho de daños*, Civitas, Madrid, 2.000, pág. 191.

⁴⁴ MORENO MARTÍNEZ, J.A., *Daños indirectos de familiares y terceros por causa de lesiones*, Aranzadi, Pamplona, 2.012, págs. 25-26.

⁴⁵ SAP Burgos 14 julio 2.010 (JUR 2010\296329) F.D. 5º: «la obligación de motivar las sentencias se extiende también a la determinación de las consecuencias civiles del delito, de forma que debe ser posible reconocer en la resolución judicial los criterios utilizados en ese concreto aspecto. En este sentido, el artículo 115 del Código Penal dispone que los Jueces y Tribunales, al declarar la existencia de responsabilidad civil, establecerán razonadamente en sus resoluciones las bases en las que fundamenten la cuantía de los daños e indemnizaciones».

casi al arbitrio de los tribunales en cada asunto concreto, principalmente en lo que a daños morales se refiere. Al referirme a la escasa existencia de normativa legal respecto de la fijación del *quantum* indemnizatorio, cabe hacer referencia a la Ley 35/2015, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación⁴⁶, siendo ésta la ley utilizada por los tribunales –además de la única existente en nuestro ordenamiento jurídico- a la hora de determinar dicha cantidad indemnizatoria. Los criterios de dicha ley son de aplicación obligatoria en los casos de accidentes de circulación, y de aplicación facultativa –meramente orientadora- para el resto de supuestos. Respecto de dicho carácter orientativo, nuestro alto tribunal admite legítimo emplear tal baremo como guía⁴⁷.

Siendo por tanto dicha ley el criterio generalizado para la determinación de la cantidad indemnizatoria, explico a continuación algunos aspectos sobre el sistema de baremos de daños mediante la disquisición expuesta por el tribunal supremo en STS 20 de febrero de 2.013, la cual dispone que

nada impide que el sistema de baremización del daño corporal, que opera como vinculante en los casos de siniestros de la circulación de vehículos, pueda operar como referente, aun sin carácter obligatorio en aquel campo, en relación a las indemnizaciones que se deben acordar en casos de delitos dolosos.

Dicha doctrina jurisprudencial es compartida por los tribunales menores, cuyas resoluciones disponen una minuciosa y detallada descripción de los diversos daños corporales y su correspondiente baremización y coeficientes, los cuales a menudo se incrementan de forma motivada, si bien no opera tal sistema indemnizatorio con el carácter vinculante que tiene en relación a la circulación de vehículo⁴⁸.

En este sentido, me resulta curioso como una ley reguladora de una materia aparentemente específica se ha convertido en la hoja de guía seguida para la mayoría de los asuntos. Es decir, se aplican los criterios previstos para los daños producidos por la circulación de vehículos a la cuantificación de otros daños como los derivados de un delito fiscal, un delito de tráfico de drogas, un delito contra la libertad sexual, etc. Si bien, desde mi punto de vista, es criticable la ausencia de normativa legal uniforme a la par que vinculante respecto de los criterios a emplear para determinar el *quantum* indemnizatorio, es cierto que la aplicación de dicho baremo como criterio de aplicación generalizado,

⁴⁶ BOE nº. 228, de 23 de septiembre de 2015, págs. 84473 a 84979.

⁴⁷ GRANADOS PÉREZ, C., “Daño civil derivado...”, *loc. cit.*, pág. 346.

⁴⁸ *Ibidem*, pág. 347.

aporta a la determinación de los daños civiles derivados de delito cierta seguridad jurídica. Dicho lo cual, deduzco como paradójico que una norma que surge como obligatoria para una materia específica, sea empleada de modo meramente orientativo para la totalidad de las materias relativas a los daños y que ello precisamente sea lo que disminuya la discrecionalidad de los tribunales sobre el *quantum* indemnizatorio, no siendo menos cierto que no hay garantías de eliminar dicha discrecionalidad, debido a la ausencia de normativa imperativa al respecto.

Expuesto lo anterior, cabe advertir que el tema sobre la cuantificación de la indemnización podría, por su extensión y complejidad abarcar *per se* un amplio y detallado trabajo de investigación, por lo que no permite ser abordado en este apartado en su totalidad.

En conclusión, cada una de estas tres modalidades de reparación, sintetizables en la *restitutio in integrum*, la satisfacción y la compensación, se identifican por un contenido específico que las diferencia entre sí, si bien comparten un elemento común⁴⁹, pues la idea de la integridad patrimonial y personal viene a ser la misma. Dicho lo cual, en cada caso concreto, habrá que atender al delito motivador de los daños que originan la responsabilidad civil, y al bien jurídico protegido en cada tipo de delito, pues en la práctica lo que se emplea es un término más amplio de reparación que englobaría las tres categorías. Así por ejemplo, el TS ha afirmado de forma reiterada en relación con la responsabilidad civil derivada del delito de alzamiento de bienes, que *en esta clase de infracciones penales la reparación civil no se produce ordinariamente a través de una indemnización de perjuicios, sino por medio de la restitución de la cosa (artículos 109 a 111 del Código Penal) que indebidamente salió del patrimonio del deudor o de la declaración de nulidad de los gravámenes ilícitamente constituidos. Y cuando se ha realizado un negocio jurídico en la comisión del delito., tal reparación civil se realiza a través de la declaración de nulidad de dicho negocio*, tal como declara la STS 8 de noviembre de 2016. En dicho pronunciamiento se refleja, a mi modo de ver, el empleo indistinto en la mayoría de casos por los tribunales de las diferentes modalidades de reparación del daño.

⁴⁹ VIDAL FERNÁNDEZ, B., “Reparación de las víctimas del delito en la Unión Europea: tutela por el Tribunal de Justicia de la UE del derecho a la indemnización”, *Revista de estudios europeos* n° 66, 2015, pág. 5.

3.2. Efectos penales del cumplimiento de la responsabilidad civil

Los aspectos civiles de este tipo de responsabilidad tienen indudable relevancia en el ámbito jurídico penal, tal como se refleja en los efectos que la misma proyecta sobre el sujeto infractor, entre los cuales cabe destacar que el cumplimiento de la condena al pago de responsabilidad civil supone para éste:

- Una circunstancia atenuante en virtud de lo expuesto por el art. 21.5ª CP, la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o a disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.
- Una condición necesaria para dejar en suspenso la ejecución de la pena, al amparo de lo previsto por el art. 80.2.3ª CP, la de que *se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado*.
- Una condición necesaria para poder obtener la libertad condicional, en tanto el art. 90.1 CP en su último párrafo dispone que *no se concederá la suspensión si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios establecidos por los apartados 5 y 6 del artículo 72 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria*.
- Previo a la entrada en vigor de la LO 1/2015 de reforma del CP, se establecía como requisito *sine qua non* para proceder a la cancelación de los antecedentes penales. El anterior código fijaba en su art. 136.2.1º que para el reconocimiento de dicho derecho debía el infractor *tener satisfechas las responsabilidades civiles provenientes de la infracción, excepto en los supuestos de insolvencia declarada por el juez o tribunal sentenciador, salvo que hubiera mejorado la situación económica del reo*. La supresión de dicho requisito podría estar encaminada a facilitar la posibilidad de dicha cancelación, en beneficio del reo.

Además de los planteados *supra* existen otros muchos aspectos considerados por la doctrina penal como efectos intimidatorios sobre el sujeto, lo cual puede verse como un medio de aproximación entre víctima e infractor, llegando algunos autores incluso a

hablar de cierto efecto pacificador, situando este tipo de responsabilidad civil, no como institución de naturaleza penal pero sí como herramienta de política criminal⁵⁰.

4. SUJETOS RESPONSABLES Y SUJETOS BENEFICIARIOS CIVILES TRAS LA COMISIÓN DEL HECHO DELICTIVO

4.1. Sujetos civilmente responsables

Como planteamiento preliminar, viene al caso hacer mención a la regla general de responsabilidad civil, la cual establece que para poder imponer objetivamente a una persona la obligación de reparar un daño, es necesario que dicho sujeto lo haya causado. Es decir, en el tema que nos ocupa, es necesario que sea un sujeto civilmente responsable del ilícito penal. Esto, atendiendo a lo expuesto por DÍEZ PICAZO, responde al concepto de causalidad adecuada, entendiendo que para poder responsabilizar a los sujetos es determinante el hecho de que las conductas de estos fueran las causas más adecuadas de la producción del daño⁵¹, en nuestro caso, derivado del delito.

La rúbrica legal penal respecto de los sujetos civilmente responsables por la comisión de un hecho potencialmente delictivo la encontramos recogida en el capítulo segundo (arts. 116-122) de nuestro Código Penal. En concreto, los tres primeros preceptos hacen referencia a la responsabilidad civil directa, los tres segundos a la responsabilidad civil subsidiaria, y por último el art. 122 CP determina la obligación de resarcimiento del partícipe a título lucrativo de los efectos dañosos del delito. Se establece de tal modo una responsabilidad civil prioritaria de los autores y subsidiaria de los cómplices, cuestión ésta que parece encontrar razón de ser en los conceptos propios del Derecho Penal relativos a la mayor culpabilidad del autor y dominio del hecho, si bien, como señala ZUBIRI DE SALINAS, no deberían estos extrapolarse a los efectos civiles derivados de la acción. Entiende este autor que siendo el daño consecuencia de la acción típica de todos ellos –autores, cómplices y otros partícipes- parecería más lógico tomar como norma la solidaridad de éstos como deudores, sin perjuicio de la fijación de cuotas dependiendo de la mayor o menor intervención en la acción y la mayor o menor relevancia causal de su conducta⁵².

⁵⁰ NAVARRO MENDIZÁBAL, I.A., VEIGA COPO, A.B., *Derecho de Daños...*, op. cit., págs. 41-42.

⁵¹ DÍEZ-PICAZO, L., *Derecho de daños*, Civitas, Madrid, 1.999, pág. 334.

⁵² ZUBIRI DE SALINAS, F., “Responsables civiles en el Código Penal”, *Jueces para la democracia* n° 25, 1.996, pág. 62.

Manifestado lo cual, y como ya se he expuesto en líneas anteriores, la responsabilidad penal no se corresponde de forma automática con la responsabilidad civil ni viceversa. Siendo esto así, puede haber responsables civiles diferentes de los criminales, pudiendo identificar a dichos sujetos distintos del infractor en los siguientes grupos:

- I. Sujetos responsables en los casos de exención de responsabilidad criminal pero no civil del culpable, conforme al contenido del art. 118 CP.
- II. Poseedores o beneficiarios del objeto del delito en tanto hayan participado en los efectos del delito a título gratuito, en virtud del art. 122 CP.
- III. Responsables civiles directos por mediar contrato de seguro, al amparo del art. 117 CP. Con esta acción directa busca el legislador dotar de cobertura al perjudicado por los daños y perjuicios causados, sin tener que dirigirse antes contra el causante del daño. La obligación de indemnizar a la víctima, distinta del asegurado, incluye los supuestos de delitos dolosos cometidos por el asegurado⁵³.
- IV. Responsables civiles subsidiarios previstos en los arts. 120-122 CP, esto es, en defecto de los que lo sean criminalmente, serán⁵⁴:

IV.1º. Los padres o tutores, por los daños y perjuicios causados por los delitos cometidos por los mayores de dieciocho años sujetos a su patria potestad o tutela y que vivan en su compañía, siempre que medie por su parte culpa o negligencia.

IV.2º. Las personas naturales o jurídicas titulares de editoriales, periódicos, revistas, estaciones de radio o televisión o de cualquier otro medio de difusión escrita, hablada o visual, por los delitos cometidos utilizando los medios de los que sean titulares, dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 212 CP.

IV.3º. Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de sus empleados se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción.

⁵³ GRANADOS PÉREZ, C., “Daño civil derivado...”, *loc. cit.*, pág. 350.

⁵⁴ En este sentido conviene consultar lo previsto por los arts. 120-121 CP, cuya literalidad ofrece una acertada clasificación de este tipo de sujetos responsables.

IV.4°. Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios.

IV.5°. Las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros, por los delitos cometidos en la utilización de aquellos por sus dependientes o representantes o personas autorizadas.

IV.6°. Los entes públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos. Este grupo de responsables subsidiarios, es una materia tratada de forma pacífica por nuestra doctrina y jurisprudencia, por lo que no mereciendo atención como cuestión problemática, me limito a señalar aquí los requisitos que deben cumplirse para que surja tal responsabilidad civil:

- Que los delitos sean cometidos por autoridad, agentes o contratados de la Administración o funcionarios públicos.
- Que hubieran sido cometidos cuando estos se hallaban en el ejercicio de sus cargos o funciones.
- Que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que le estuvieren confiados.

En este sentido, es preciso reseñar que en los supuestos de exigencia de este tipo de responsabilidad en el proceso penal la acción deberá ir dirigida de forma simultánea contra dichos sujetos y contra la Administración o ente público presuntamente responsable civil subsidiario.

Podemos concluir al respecto que se trata de supuestos donde se exige responsabilidad a personas que no han participado en el delito pero que sin embargo, tienen una vinculación con los partícipes del hecho que genera una culpa *in vigilando*, *in eligendo*, o una responsabilidad objetiva⁵⁵, legalmente prevista. Así, una vez observados los diferentes casos, podemos deducir los siguientes presupuestos de la responsabilidad subsidiaria:

- La comisión de un delito que lleve aparejada responsabilidad civil.

⁵⁵ GRANADOS PÉREZ, C., “Daño civil derivado...”, *loc. cit.*, pág 352.

- La insolvencia del autor de la infracción punible, ya que la responsabilidad civil subsidiaria es de segundo grado, y sólo tiene lugar cuando el agente directamente responsable no puede satisfacerla.
- Haber dado entrada al responsable subsidiario en el proceso por el cauce normal del art. 616 de la LECrim ss., pues de lo contrario se vulnerarían los principios constitucionales de contradicción, audiencia, etc⁵⁶.

4.2. Sujetos beneficiarios

La cuestión sobre quiénes son los sujetos beneficiarios de la responsabilidad civil derivada del hecho delictivo, dicho de otra manera, los legitimados activamente para reclamar dicho tipo de responsabilidad, es quizás una de las pocas cuestiones pacíficas de la institución. Así, corresponden los beneficios surgidos de esta responsabilidad a aquellos considerados perjudicados por el hecho tipificado penalmente.

Superada actualmente la antigua idea de limitar únicamente a los daños directos, inmediatos y principales el criterio para establecer la titularidad del crédito resarcitorio, impidiendo su cobro a cualesquiera otros sujetos, dicha idea ha ido evolucionando. En este sentido, es importante señalar que ya no solo serán beneficiarios de la pretensión civil subsiguiente al ilícito penal las víctimas directas del delito, sino también los familiares de éstos y posibles terceros perjudicados. Es decir, no deben considerarse perjudicados únicamente los interesados en el bien jurídico protegido por el tipo penal, sino que la lesión a cualquier otro interés debe ser resarcida siguiendo los correspondientes criterios en cada caso. Y ello tiene base en la idea defendida por SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS relativa a la lesión probada como fundamento único de la facultad para exigir el resarcimiento, pudiendo llevarse a cabo el ejercicio de la acción a ello encaminada por el titular o por otra persona, conforme a la reglas de la representación voluntaria y legal. La titularidad originaria de dicha acción ha de determinarse atendiendo al daño resarcible como concepto de daño al interés subjetivo-real concreto, y relativo a la atipicidad del ilícito civil imputable de forma objetiva al hecho lesivo⁵⁷.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, M.B., *El ilícito civil...*, op. cit., pág. 188.

4.2.1. Sujetos beneficiarios como agraviados principales

A la hora de determinar quiénes son los agraviados de un hecho delictivo habrá que delimitar en primer lugar cuál es el bien jurídico que trata de proteger dicho tipo penal. De tal modo, quien sea considerado titular de dicho bien jurídico será el agraviado directo y susceptible de obtener los beneficios derivados de la responsabilidad civil «*ex delicto*», pero únicamente cuando del determinado delito deriven daños civiles será la víctima merecedora de la restitución, reparación e indemnización que proceda en cada caso⁵⁸. Se hace entonces necesario en este sentido realizar la siguiente matización: ofendido por el delito y víctima del daño no confluyen en una misma persona en todas las ocasiones⁵⁹. Como se deduce del contenido de la STS 30 de junio de 2.015, el agraviado o sujeto pasivo del delito es el ofendido que ha sufrido un daño criminal, mientras que el perjudicado es el sujeto pasivo del daño civil indemnizable o el titular del interés directa o inmediatamente lesionado por el ilícito civil generador de obligaciones que, además, es delito, cualidades ambas que pueden coincidir o no. Se trata de dos condiciones distintas, donde vuelve a aparecer –haciéndose imprescindible- la diferenciación entre daño criminal y daño civil. A modo de ejemplo, en un supuesto de delito con resultado de muerte, el afectado por el daño criminal será el sujeto pasivo del acto delictivo, el fallecido, mientras que los perjudicados por el daño civil serán los familiares, que recibirían la indemnización procedente de la responsabilidad civil que de dicho delito contra la vida derive.

4.2.2. Sujetos beneficiarios como familiares y herederos de los agraviados y otros terceros perjudicados

Este grupo de beneficiarios ha venido siendo analizado por la doctrina de modo separado, situando por un lado a los familiares y herederos, y por otro a los terceros perjudicados. Pero a diferencia de dicho tratamiento aparentemente independiente, he optado por abordar ambos grupos en un mismo apartado, pues la labor de investigación realizada al respecto me ha permitido deducir que el fundamento para reconocer el crédito resarcitorio a unos y a otros es el mismo, siendo por tanto la subdivisión plasmada por la doctrina únicamente estructural, sin trascendentes consecuencias en el ámbito sustantivo.

⁵⁸ QUINTERO OLIVARES, G., CAVANILLAS MÚGICA, S., DE LLERA SUÁREZ-BARCENA, E., *La responsabilidad...*, op. cit., pág. 212.

⁵⁹ Vid. YZQUIERDO TOLSADA, M. *Aspectos civiles...*, op.cit., pág. 135 donde explica tal distinción mediante la exposición de la sentencia de 18 de enero de 1989.

Así, me adhiero a la opinión del legislador penal, quien incluye ambos grupos en el art. 113 CP sin diferenciaciones.

El anterior apunte no implica automáticamente una consideración de estos sujetos como jurídicamente idénticos ni mucho menos, pues bien es cierta la existencia de diferencias. –por ej., el motivo por el cual los herederos son beneficiarios o que los daños morales por daño psíquico serán reconocidos a los familiares más próximos-. Los familiares y terceros serán beneficiarios de la responsabilidad civil derivada de delito en unas ocasiones en lugar del agraviado principal y en otras, de forma complementaria a éste. La determinación y cuantificación de los daños de estos sujetos requiere un análisis completo en cada caso concreto, dependiendo del tipo de delito ante el que nos encontremos y el tipo de daños que de él deriven.

5. PRINCIPALES CUESTIONES PROBLEMÁTICAS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIGUIENTE AL ILÍCITO PENAL

5.1. Responsabilidad civil derivada de delitos cometidos por menores de edad

5.1.1. Planteamiento de la cuestión y contexto jurídico

Nadie duda de la inimputabilidad de los menores de edad y por ende de la exención de responsabilidad criminal de los mismos. Ahora bien, dicha ausencia de responsabilidad penal no elude la correspondiente responsabilidad civil que del daño causado por el hecho delictivo pueda derivar. A este respecto, señala DÍAZ ALABART que no se precisa mayoría de edad para responder civilmente, sino la imputabilidad del sujeto infractor, y normalmente, un menor de 14 años desarrollado física y psicológicamente lo es⁶⁰. Pero por regla general, los menores carecen de capital suficiente con el que hacer frente a la condena al pago de la responsabilidad civil que los hechos delictivos por él cometidos puedan originar, aportando este hecho especial trascendencia a este apartado.

El régimen jurídico aplicable variará en función de la edad del menor infractor. Así, en aquellos casos en que éste tenga una edad de entre 0 y 14 años, se aplicarán los arts. 1.902 ss. Cc, mientras que cuando el sujeto responsable tenga una edad comprendida entre 14 y 18 años, será de aplicación la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en adelante, LORPM, y de forma subsidiaria el art.

⁶⁰ DÍAZ ALABART, S., “La responsabilidad en la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de menores”, *Responsa Iurisperitorum Digesta vol. II*, 2.000, pág. 192

109 ss CP⁶¹. Todo lo anterior se complementa con la normativa civil prevista a tal efecto. Parte de doctrina especializada en menores, diferencia dentro de este grupo entre menores de 14 a 16 y de 17 a 18 años, al considerar que las infracciones de éstos últimos –menores mayores de dieciséis- conllevarían una agravación específica en delitos de violencia, intimidación o peligro para las personas⁶². Por otro lado, viene al caso destacar que existía anteriormente una eventual posibilidad para aquellos casos en que el sujeto responsable tuviere entre 18 y 21 años, pues se permitía en dichos supuestos la aplicación de la LORPM en lugar de la normativa del CP, siempre y cuando así lo estimara el juez instructor conocedor del asunto. Pero dicha posibilidad desapareció con la modificación operada por la LO 8/2006⁶³. Dejamos pues en este apartado a un lado el CP, salvo para su aplicación supletoria⁶⁴.

El verdadero avance al respecto lo introdujo la reforma de 2.006, al implantar el ejercicio conjunto de la acción civil y la acción penal en un mismo procedimiento, situando así a las víctimas de los delitos cometidos por menores en una situación procesal más semejante a los cometidos por mayores de edad⁶⁵, y buscando así una situación más beneficiosa para la víctima del delito, como se deduce del contenido de la Exp. Motivos de la ley.

Dentro del ámbito de la responsabilidad civil derivada del delito es una cuestión de compleja solución el hecho de que una misma acción delictiva sea cometida conjuntamente –coautoría, complicidad, participación- por mayores y menores de edad. La respuesta la ofrece el art. 16.5 LORPM⁶⁶, de modo que se enjuiciará por cauces distintos a ambos tipos de sujetos, por un lado el criminal y por otro el propio de la LORPM, respectivamente. En cuanto al hecho de establecer dos procedimientos paralelos para enjuiciar un mismo hecho delictivo, parece resultar difícil garantizar la congruencia

⁶¹ DURANY PICH, S., “Las reglas de responsabilidad civil en el nuevo Derecho Penal de menores”, *InDret* n° 2, 2.000, pág. 1.

⁶² RAMÓN FERNÁNDEZ, F., “La responsabilidad civil en el ámbito de los menores”, *Revista sobre la infancia y la adolescencia* n° 3, 2.012, pág. 9.

⁶³ GARCIA DÍAZ GONZÁLEZ, P.M., “Tratamiento procesal de la responsabilidad civil en el proceso penal de menores tras la reforma de 2006: reflexiones a la luz de la circular de la Fiscalía general del Estado 1/2007, de 26 de noviembre”, *REDUR* n° 5, 2.007, pág. 30.

⁶⁴ Dicho carácter supletorio queda establecido por la DA Primera LORPM: “Tendrán el carácter de normas supletorias, para lo no previsto expresamente en esta Ley Orgánica, en el ámbito sustantivo, el Código Penal y las leyes penales especiales, y, en el ámbito del procedimiento, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en particular lo dispuesto para los trámites del procedimiento abreviado regulado en el Título III del Libro IV de la misma”.

⁶⁵ ALBERT PÉREZ, S., *Sistema de responsabilidad civil derivada de delito cometido por menores de edad: exigencia de responsabilidad civil de menores. Jurisdicción civil y jurisdicción contenciosa*, Comares, Granada, 2.007, pág. 6

⁶⁶ DURANY PICH, S. “Las reglas de...”, *loc cit.*, pág. 4.

entre resoluciones, y más cuando cada uno de ellos se rige por normativa diferente dependiendo del sujeto encausado.

5.1.2. Sujetos civilmente responsables

5.1.2.1. Sujetos civilmente responsables de delitos cometidos por menores de 14 años

Establece el art. 1903 Cc que la obligación que impone el artículo referido a la responsabilidad extracontractual es exigible, no solo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. Y así, los padres deberán responder de los daños causados por los hijos bajo su guarda; los tutores responderán de los causados por menores bajo su autoridad y que habiten en su compañía; los titulares de un centro de enseñanza serán responsables de los daños causados por los menores durante el tiempo que se hallen bajo su control o vigilancia. En supuestos de aplicación de dicho art. 1.903 rige el criterio de la objetivación de la responsabilidad, pues como señala dicho precepto, la responsabilidad cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño⁶⁷.

5.1.2.2. Sujetos civilmente responsables de delitos cometidos por menores de entre 14 y 18 años

Establece el art. 61.3 LORPM que *cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los casos.* Tomando en consideración el tenor literal de este precepto, se observan como sujetos responsables:

1. Los padres: siendo solidariamente responsables los padres biológicos o los adoptivos desde la adopción, en virtud de los arts. 162 y 169 Cc, incluyéndose a los padres separados y divorciados como responsables⁶⁸. Responderán ambos progenitores, siendo conveniente a efectos prácticos demandar a los dos⁶⁹, sin perjuicio de la posibilidad de excluir como responsable a aquel que se encuentre privado de la patria

⁶⁷ DÍAZ MARTÍNEZ, M., “El régimen especial de la responsabilidad civil en el proceso penal de menores”, *Diario La Ley* nº 6.515, 2.006.

⁶⁸ ALBERT PÉREZ, S., *Sistema de responsabilidad...*, op. cit. pág. 42.

⁶⁹ NAVARRO MENDIZÁBAL, I. A., “La responsabilidad civil en la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor”, *ICADE Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales* nº 53, Madrid, 2.001, pág. 143.

potestad. Si bien suelen excluirse como responsables a los padres de menores emancipados, hay autores como BUSTO LAGO, que son partidarios de incluirlos, con el fin de garantizar la existencia de un patrimonio solvente con el que hacer frente a la responsabilidad⁷⁰.

2. Tutores: establece el art. 229 Cc la obligación de los parientes llamados a la tutela y a quienes bajo cuya guarda se encuentre el menor a promover la constitución de la misma desde el momento que conocieran el hecho motivador de la misma. Si no cumplieren tal obligación responderán solidariamente de la responsabilidad civil que se fije⁷¹. En los casos en que el menor se encuentre en situación de desamparo, asumirá su tutela la correspondiente administración pública, en virtud del art. 239 CC⁷². Además, deberán incluirse como tutoras aquellas entidades públicas que asuman la guarda y custodia del menor conforme al 172 CC. Así, quienes sean titulares de la tutela de los menores responderán solidariamente al mismo nivel que los padres.

3. Acogedores: regulándose dicha figura jurídica en el art. 173 Cc, el cual impone al acogedor *las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral en un entorno afectivo*. En caso de no pactarse nada al respecto, serán responsables solidarios los acogedores y la entidad pública promotora del acogimiento⁷³. Cabe mencionar que el art. 20 bis 2. 1) de la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia dispone que los acogedores estarán sometidos a las mismas obligaciones legales que aquellos que ostenten la patria potestad. Y más concretamente el art. 20.3 d) 2º establece que a la resolución de formalización del acogimiento familiar acordada conforme al Cc debe acompañarse mediante anexo la regulación del sistema de cobertura de los daños que el menor sufra o que pueda provocar a terceros.

4. Guardadores legales y guardadores de hecho: siendo los primeros aquellas instituciones públicas que acogen a un menor desamparado por causa de fuerza mayor (172 Cc), y los segundos aquellas personas físicas o jurídicas que acogen de forma

⁷⁰ BUSTO LAGO, J.M., “El responsable civil en el proceso penal en la perspectiva de la reforma de la Justicia Penal: modelos comparados y problemas del vigente sistema de acumulación potestativa” al que hace referencia ALBERT PÉREZ, S., *Sistema de responsabilidad...*, op. cit. pág. 42.

⁷¹ ALBERT PÉREZ, S., *Sistema de responsabilidad...*, op. cit. pág. 43.

⁷² DURANY PICH, S. “Las reglas de...”, loc cit., pág. 4.

⁷³ ALBERT PÉREZ, S., *Sistema de responsabilidad...*, op. cit. pág. 43.

transitoria al menor (303 Cc)⁷⁴. Ambos tipos de guardadores responderán de forma solidaria con el menor infractor.

5. Otros responsables (centros de enseñanza no superior, centros de internamiento y empresarios): si bien el art. 61.3 LORPM no hace mención expresa a ellos, constituyen un tipo de responsables previstos por el art. 1.903 Cc de modo equivalente a los padres y tutores⁷⁵, y no es poca la doctrina que ha venido dándoles tratamiento en este apartado. Existen resoluciones jurisprudenciales que consideran a este tipo de sujetos incluidos en la categoría de “guardadores de hecho”, en tanto asumen por delegación funciones de guarda y vigilancia de los menores, tal como dispone la SAP Cantabria de 23 de diciembre de 2.003⁷⁶. En cuanto al tipo de responsabilidad de estos sujetos hallamos pronunciamientos que otorgan a ésta carácter subsidiario por aquellos actos ilícitos cometidos por los alumnos menores de edad, así lo entiende la SAP Álava de 27 mayo 2.005⁷⁷, si bien dicha subsidiariedad no es criterio unánime en la jurisprudencia.

Es oportuno tratar en este apartado un tema de plena actualidad: el acoso escolar o «*bullying*», y su relación con la responsabilidad civil de los centros docentes ante tal ilícito penal. No existe un tipo específico de delito de acoso, pero éste puede subsumirse en distintos hechos típicos del CP⁷⁸, por ejemplo, delitos contra la integridad moral (173 CP), delito de inducción al suicidio (143 CP), etc. La posible responsabilidad civil derivada de estos hechos antijurídicos, se regirá por normativa diferente según sean o no típicos penalmente⁷⁹. Así, si la conducta constituye únicamente un ilícito civil, regirá el 1.902 ss. CC previsto para la culpa extracontractual, mientras que para los ilícitos penales será de aplicación la normativa analizada en el presente apartado en función de la edad de los menores. Pues bien, cuando la conducta calificable como «*bullying*» encaje en alguno de los tipos penales y origine además una serie de daños civiles –generalmente a la salud física, psicológica y social de la víctima⁸⁰– surgirá la responsabilidad civil «*ex delicto*». Así por ejemplo, la SAP de La Rioja de 8 de enero de 2015 partiendo de la concurrencia

⁷⁴ DURANY PICH, S. “Las reglas de...”, *loc cit.*, pág. 5.

⁷⁵ GARCIA DÍAZ GONZÁLEZ, P.M., “Tratamiento procesal...”, *loc. cit.*, pág. 32.

⁷⁶ DÁVILA GONZÁLEZ, J., “La responsabilidad civil en la Ley Orgánica 5/2000” en LLAMAS POMBO, E., *Estudios de derecho de obligaciones*, La Ley, Madrid, 2.006, pág. 412.

⁷⁷ GARCIA DÍAZ GONZÁLEZ, P.M., “Tratamiento procesal...”, *loc. cit.*, pág. 32.

⁷⁸ BERROCAL LANZAROT, A.I., “La comunidad educativa ante el acoso escolar o *bullying*. La responsabilidad civil de los centros docentes”, *Diario La Ley* nº 7.359, 2.010.

⁷⁹ PÉREZ VALLEJO, A.M., “El complejo régimen que disciplina la responsabilidad civil por daños derivados del acoso escolar”, en *Análisis jurídico y cuantitativo de la violencia en la infancia y adolescencia: propuestas de intervención socio-legal*, ADC LXVIII, 2.015, pág. 1.413.

⁸⁰ *Ibidem*, pág. 1.417.

de distintos responsables, declara la responsabilidad civil solidaria del menor, junto a la de sus padres y de la Comunidad Autónoma como titular del centro escolar; entendiendo que lo propio es compartir responsabilidades toda vez que los responsables participan en el proceso de gestión educativa del menor y ejercen sobre el mismo un control, aunque sea potencial o cuasi-potencial, de su comportamiento⁸¹.

A modo de conclusión, y respecto de las consecuencias de la diferenciación entre el art. 1.903 Cc y 61.3 LORPM éstas son en definitiva las siguientes: en cuanto al primero, es de aplicación para toda la minoría de edad, respondiendo los padres únicamente y con presunción de culpa -aunque progresivamente objetivizada por la jurisprudencia-; y respecto del segundo, éste será de aplicación para sujetos de entre 14 y 18 años, respondiendo los padres solidariamente con los hijos, y rigiendo la regla de la responsabilidad civil objetiva con posible moderación de la cuota de los padres⁸². Al referirme aquí con el término “padres” incluyo en él en sentido amplio a todos los posibles sujetos responsables diferentes del menor infractor.

Observado lo anterior, dado el tratamiento actual de la cuestión y teniendo presente el contenido de la Exp. Motivos de la LORPM parece quedar claro que prácticamente son nulos los supuestos en que existe exoneración patrimonial⁸³ de los sujetos responsables mencionados, pues en la mayoría de supuestos dichos menores infractores se encuentran en situación de insolvencia. En palabras de ROGEL VIDE, solo cuando los daños no fueren causados por el menor no será responsable el padre o tutor; en todos los demás casos, responderá siempre⁸⁴.

5.1.3. Tramitación del procedimiento: pieza separada de responsabilidad civil

La acción para exigir la reparación del daño civil derivado de la acción delictiva se puede ejercitar bien por vía de reserva de la acción civil, bien por vía de interposición en el mismo procedimiento ante el juez de menores. El art. 61 LORPM dispone que

la acción para exigir la responsabilidad civil en el procedimiento regulado en esta Ley se ejercitará por el Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a ella, la ejerce por sí mismo en el plazo de un mes desde que se le notifique la

⁸¹ *Ibídem*, pág. 1.449.

⁸² NAVARRO MENDIZÁBAL, I.A. y VEIGA COPO, A.B., *Derecho de daños...*, op. cit., pág. 53.

⁸³ QUINTERO OLIVARES, G., *La Responsabilidad Civil...* op. cit., pág. 158.

⁸⁴ ROGEL VIDE, *La responsabilidad civil extracontractual en el Derecho español*, al que hace referencia NAVARRO MENDIZÁBAL, I.A., “La responsabilidad civil en la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor”, *ICADE Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas* nº 53, 2.001, pág. 27.

apertura de la pieza separada de responsabilidad civil o se la reserve para ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil conforme a los preceptos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se tramitará una pieza separada de responsabilidad civil por cada uno de los hechos imputados.

Pues bien, la primera especialidad planteada por el precepto es la relativa a la legitimación activa, en tanto prevé la intervención del Ministerio Fiscal⁸⁵, quien deberá ejercitar la acción civil mientras no opte el perjudicado por ejercitarla él mismo o renunciar a ella.

Por otro lado, si bien la normativa vigente permite ejercitar la acción de responsabilidad civil simultáneamente a la reclamación de responsabilidad penal, el procedimiento a seguir en el caso de delitos cometidos por menores de edad guarda una importante peculiaridad. Tal como dispone el art. 16.4 LORPM el juez de menores ordenará la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil, que se tramitará conforme a lo establecido en las reglas del artículo 64 de la ley. Dicha norma relativa a la apertura de pieza separada de responsabilidad civil en el momento en que se inicia la instrucción tendrá lugar siempre y cuando el hecho delictivo cometido por el menor pueda conllevar una reparación civil⁸⁶, como es lógico. Y es que pueden darse supuestos que impidan la tramitación de responsabilidad civil en pieza separada -casos en que se dicte auto de sobreseimiento sobre los hechos o la intervención del menor, o aquellas ocasiones en que no exista responsabilidad civil «*ex delicto*» como por ejemplo, los delitos de peligro abstracto⁸⁷-.

La consecuencia principal del procedimiento previsto es el hecho de que los mayores y los menores de edad deben ser enjuiciados de forma separada, siendo ésta una cuestión no carente de críticas, pues conforme al procedimiento regulado en la LORPM, la responsabilidad del menor no se analiza en un único juicio con todos los responsables, sean o no mayores de edad, y ello puede ocasionar pronunciamientos discordantes sobre unos mismos hechos⁸⁸. Este extremo, en conexión con la cuestión de la responsabilidad

⁸⁵ SAGÜILLO TEJERINA, E., “Algunas cuestiones procedimentales sobre la exigencia de responsabilidad civil en el proceso penal contra menores”, *Diario La Ley* N° 8.695, 2.016.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ DÍAZ MARTÍNEZ, M., “El régimen especial...”, *loc. cit*.

⁸⁸ “La Audiencia confirma la condena al Cuco por encubrir y le obliga al pago de 414.000 euros” *Diario La Ley* N° 7.721, 2.011 (disponible en http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2OzU7DMBCEnwZiLFVOVTUnHjPAQIVCCLuG3tJLFxvWK9D8_aYhgOH0Y40n2b2qyAvHd7EPhYfMLkA2IH6CHwFHe_eYwINURLIz0R60qVngPrUFU1Mcw3IEJBtIe9a7ZbYwxGgtTVnlJJar7bigEuizNQta6q2CpwUiCdytnlYcYOertVxB75sFijhAtiKYK5JGLzDXMQmUDsBrZfDeXs51zzSmbfd7NSPnCtj3MGASVGMYYxucqWfm)

hasta las STS 29 de febrero de 2.016⁹³ cuando se pronuncia nuestro alto tribunal al respecto.

Si atendemos al art. 116.3 CP éste no ha experimentado alteraciones tras las citadas reformas: *la responsabilidad penal de la persona jurídica llevará consigo su responsabilidad civil*. Sobre tal efecto se pronuncia la circular de la Fiscalía General del Estado 1/2011 relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del CP efectuada por LO 5/2010, matizando que

*la responsabilidad civil subsidiaria de las personas jurídicas a que se refiere el artículo 120 del Código Penal resulta de aplicación en los supuestos no contemplados en el artículo 31 bis y/o cuando sea de aplicación el artículo 31 del Código Penal, además de para aquellas conductas que a pesar de tener encaje en el artículo 31 bis, su comisión por la persona jurídica no se encuentra prevista en el catálogo numerus clausus de la Parte Especial*⁹⁴.

Es conveniente precisar, puesto que pudiere dar lugar a dudas, que dicha responsabilidad directa del art. 31 bis y 116 CP no resulta compatible con la declaración de responsabilidad subsidiaria en aplicación de la regla del 120 CP⁹⁵.

5.2.2. Responsabilidad civil directa del delito cometido por personas jurídicas ex. art. 116.3 CP

La responsabilidad civil directa de la persona jurídica prevista en el art. 116.3 CP debe ser puesta en conexión con el 31 CP relativo a su responsabilidad criminal. De este modo, si una determinada persona jurídica es autora de unos hechos delictivos y es condenada por ello en aplicación del 31 CP, será también responsable civil por aplicación del art. 116.3 CP. Y con base en ello, deberá responder solidariamente con las personas físicas de ella dependientes que fueran condenadas por la comisión de los mismos hechos constitutivos de delito⁹⁶.

⁹³ NEIRA PENA, A.M., “La aplicación jurisprudencial de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Reflexiones sobre la STS 154/2016, de 29 de febrero, primera sentencia de condena del TS frente a una persona jurídica”, *Diario La Ley* N° 8.736, 2.016.

⁹⁴ FIGUEROA NAVARRO, C., “Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2011 relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del CP efectuada por la LO 5/2010”, *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, vol. LXIV, 2.011, pág. 444.

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ LARA ORTIZ, M. L., “Responsabilidad civil derivada de delito, ¿base para la construcción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas?”, *Documentos de Trabajo. Seminario Permanente de Ciencias Sociales* N° 4, 2.013, pág. 42.

5.2.3. Responsabilidad civil subsidiaria del delito cometido por personas jurídicas ex. art. 120 CP

Recoge este apartado aquella responsabilidad civil subsidiaria de la persona jurídica en defecto del responsable criminal. La responsabilidad del art. 120 CP se conecta con la del 1.903 Cc, prevista para los casos en que el responsable subsidiario no hubiere puesto toda la diligencia debida para evitar la producción del daño⁹⁷.

Para esclarecer la diferencia entre ambos tipos de responsabilidad, procedo a explicar el ejemplo expuesto por LARA ORTIZ. En el supuesto de que una persona jurídica actúe como tutora de una persona incapacitada, y dicho incapacitado cometa un delito, resultará inimputable el autor del hecho delictivo en virtud de la causa de exención del art. 20.1 CP, pero sí será responsable civil de los daños que su actuación ha provocado la persona jurídica por aplicación de la responsabilidad subsidiaria del art. 120 CP, y no por vía de responsabilidad directa del art. 116 CP, puesto que esta última exige que para imponer la responsabilidad civil el sujeto sea criminalmente responsable⁹⁸. En cambio, si la persona física que comete el delito actúa como administrador de una persona jurídica, siendo éste responsable penal, será responsable civil directo por aplicación del 116.3 CP.

La conclusión obvia resulta ser, en palabras de GÓMEZ TOMILLO que el art. 120 CP se aplica cuando no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, y el art. 116. 3 del mismo código cuando sí la haya⁹⁹. Cabe decir sin embargo, que pese a posicionarse como solución más lógica, emanan de la misma ciertos problemas, en tanto *el reconocimiento de responsabilidad penal de las personas jurídicas va a producir un efecto paradójico*¹⁰⁰, puesto que hará disminuir el efecto preventivo típico de la responsabilidad civil derivada del hecho delictivo.

Viene al caso precisar, que la responsabilidad civil derivada de delitos cometidos por personas jurídicas solo puede tener lugar en aquellos delitos susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas. Así, un ejemplo de dicho tipo de delitos que da lugar a su correspondiente responsabilidad civil en su caso, viene regulado en el 264 ter CP –delito de daños informáticos-. La responsabilidad civil derivada de dicho delito cabría ser declarada en aplicación del 116.3 CP, alcanzando la misma al daño emergente y al lucro

⁹⁷ LARA ORTIZ, M. L., “Responsabilidad civil...”, *loc. cit.*, pág. 25.

⁹⁸ *Ibídem*, pág. 26.

⁹⁹ GÓMEZ TOMILLO, M., *Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema español*, Lex Nova, Valladolid, 2.010. pág. 194.

¹⁰⁰ *Ibídem*.

cesante en función del tiempo de interrupción con el oportuno resarcimiento de las horas de trabajo afectadas, el tipo de actividad y las pérdidas en la cartera de clientes¹⁰¹.

Analizado lo cual, puede surgir el debate en torno a si la responsabilidad civil derivada de delito es la que ha servido como base para la construcción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y ello en tanto el reconocimiento de responsabilidad penal de las personas jurídicas introducido en 2.010, parece fundamentarse en los criterios que tradicionalmente han servido de apoyo para la determinación de la responsabilidad civil, apartándose en cierta medida de los principios clásicos del Derecho Penal¹⁰².

5.3. Efectos del proceso penal en el ulterior proceso civil: prejudicialidad penal y cosa juzgada

Para determinar la influencia que pudiere tener el proceso penal en el subsiguiente proceso civil, se hace necesario analizar las diferentes instituciones en las que se materializan dichos efectos procesales, compartiendo éstas la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y congruencia en nuestro ordenamiento.

Dicho lo cual, la cosa juzgada material aparece regulada en el art. 222 LEC y está referida a la imposibilidad de que, tras la firmeza de las sentencias -ya sean estimatorias o desestimatorias- se tramite un proceso posterior sobre el mismo objeto que el de la sentencia firme. En lo que aquí interesa, establece el último apartado del reseñado precepto que lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin al proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal. En cuanto a la cosa juzgada formal prevista en el 207 LEC, es efecto de todo tipo de resoluciones judiciales dentro de un proceso concreto –proyección interna de la institución-, y se da en el momento en que la resolución es firme, debiendo ser respetada por el tribunal que la dictó y no pudiendo actuar de modo distinto a lo ya declarado¹⁰³.

Tomando como referencia la definición expuesta por la STS 13 de septiembre de 2.010, la cosa juzgada material se refiere a sentencias que se pronuncian sobre el fondo u otras resoluciones equivalentes, mientras que la cosa juzgada formal alcanza a sentencias

¹⁰¹ VELASCO NÚÑEZ, E., “Los delitos informáticos”, *Cuadernos Penales José María Lidón nº 12*, Bilbao, 2.016, págs. 386.

¹⁰² LARA ORTIZ, M. L., “Responsabilidad civil...”, *loc. cit.*, pág. 5.

¹⁰³ TAPIA FERNÁNDEZ, I., LÓPEZ SIMÓ, F., *Lecciones de Derecho Procesal*, vol. III, Treballs, Palma de Mallorca, 2.009, pág. 178.

y resoluciones, y es inherente a la firmeza de las mismas¹⁰⁴. Dicho de modo más claro, la primera alcanza a resoluciones de fondo que ponen fin al proceso, mientras que la segunda alcanza a las resoluciones firmes, tanto procesales como materiales, bien sean firmes o interlocutorias¹⁰⁵.

Por otro lado, cabe hablar aquí de prejudicialidad penal en los casos en que haya mediado reserva de la acción civil, y su relación con la consecuencia procesal de suspensión del procedimiento civil hasta la terminación del procedimiento penal, pues la sentencia penal puede tener influencia decisiva para el juez civil. Conforme a los arts. 40 LEC, 10.2 LOPJ y 114 LECrim, para que exista suspensión de actuaciones es preciso que haya una íntima conexión entre el objeto del pleito civil y el del penal. El artículo 40.2 LEC exige la concurrencia de dos requisitos:

- Que se acredite la existencia de causa criminal abierta en la que se investiguen unos hechos de apariencia delictiva en los que se fundamente la pretensión en el proceso civil.
- Que la resolución recaída en el proceso penal pueda tener influencia decisiva para el proceso civil.

Un ejemplo que viene al caso es el relativo al debate surgido en nuestro escenario jurídico actual acerca de los valores representativos del capital social de “Bankia”, pues se sopesa que pueda afectar al procedimiento de las causas civiles el hecho de estarse tramitando la acción penal ante la Audiencia Nacional. Las respuestas ofrecidas por los tribunales menores distan de dar una solución uniforme, pues concurren dos posturas diferenciadas. Por un lado, hallamos pronunciamientos que consideran que la responsabilidad penal no podría desvirtuar un hecho tan notorio, sin influir el proceso penal en el civil -AAP Valencia 1 diciembre 2014-, y por otro, encontramos pronunciamientos favorables a acordar la suspensión del procedimiento hasta que recaiga resolución final en la causa penal -AAP Gijón de 31 de octubre de 2014-¹⁰⁶.

¹⁰⁴ GONZÁLEZ TIMOTEO, A., LÓPEZ-MANZANARES SOMOZA, A., “Doctrina jurisprudencial de la Sala Primera. Cuestiones procesales LEC 2.000” *Informe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo Sala Primera*, 2.011, (disponible en <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Actividad-del-TS/Estudios/Doctrina-jurisprudencial-de-la-Sala-Primera--Cuestiones-Procesales-LEC-2000>, fecha de consulta: 19/12/2016 a las 19:20h).

¹⁰⁵ LÓPEZ GUIZÁN, A., “La cosa juzgada”, *Revista de Derecho UNED* n° 5, 2.009, pág. 515.

¹⁰⁶ HERNÁNDEZ ARRANZ, M., “El «caso Bankia» ante la jurisdicción civil: apuntes de jurisprudencia”, *Diario La Ley* N° 8.664, 2.016.

Si bien el fundamento de la prejudicialidad penal es evitar la existencia de resoluciones contradictorias que vulneraría el art. 24 CE, cabe precisar que la regla general es la de no suspensión del procedimiento, y la suspensión del procedimiento civil por prejudicialidad penal debe ser interpretada de forma restrictiva. Para que pueda prosperar la suspensión por prejudicialidad penal es preciso fundamentar de qué forma el pronunciamiento ofrecido por la jurisdicción penal podría condicionar la decisión del proceso civil. En este sentido, pese a ser los hechos enjuiciados en uno y otro orden jurisdiccional los mismos, la jurisdicción penal debe determinar si la parte acusada es responsable de delito conforme al CP, la función del tribunal civil es determinar el correspondiente *quantum* indemnizatorio atendiendo a reglas civiles.

Conviene señalar que de decretarse la suspensión, ésta únicamente podría acordarse una vez celebrado el juicio, en el momento de dictar sentencia o, cuanto menos, tras la fijación de los hechos en el acto de la audiencia previa. El art. 40.3 de la LEC es tajante en este sentido: *la suspensión a que se refiere el apartado anterior se acordará, mediante auto, una vez que el proceso esté pendiente sólo de sentencia.*

Una vez vista la conexión de procesos y los problemas que la influencia de un proceso sobre otro puede ocasionar, se observa la acumulación de pretensiones como solución al conflicto, pues la misma es útil a la hora de evitar la existencia de sentencias contradictorias. Como expone MARTÍN PASTOR, la resolución relativa al objeto penal es prejudicial respecto del proceso civil conforme al art. 116 LECrim, pues siendo la causa de pedir la misma en ambos procesos podría producirse una diferente convicción judicial sobre dicha causa¹⁰⁷. Sin embargo la acumulación de acciones –civil y penal- no es la única vía posible. Así, de la eficacia probatoria de la resolución judicial previa podemos obtener diferentes resultados: una sentencia absolutoria penal, pudiendo ésta incluir además declaración de inexistencia de hechos; una sentencia penal condenatoria, con los efectos de cosa juzgada. Dicho lo cual, teniendo presente tal clasificación, trataré de abordar a continuación los distintos escenarios jurídicos que pueden surgir:

¹⁰⁷ MARTÍN PASTOR, J., “Amparo constitucional por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) en relación con el derecho a la libertad personal (artículo 17.1 CE), y su incidencia sobre la responsabilidad civil ex delicto (A propósito de la sentencia de la Sala 2.ª del Tribunal Constitucional, núm. 29/2008, de 20 de febrero, y de la sentencia de la Sala del Tribunal Supremo, núm. 430/2008, de 25 de junio)”, *Diario La Ley* N° 7.144, 2.009, pág. 5.

5.3.1. Conclusión del proceso penal con sentencia declarando la inexistencia del hecho delictivo del que pudiera derivar responsabilidad civil

Para comenzar la explicación del presente apartado cabe hacer mención al art. 116 LECrim, el cual dispone que la extinción de la acción civil no conlleva de forma directa la supresión de la acción civil, a no ser que dicha extinción proceda de una resolución firme declarando la inexistencia de los hechos potencialmente delictivos de los que pudiera derivar la responsabilidad civil. La respuesta es obvia, pues si no existe el hecho motivador es inconcebible que ese hecho origine unos daños susceptibles de tutela civil, porque sencillamente no hay tal hecho. Dicho de otro modo, cuando se dicte sentencia firme declarando la inexistencia del hecho, ésta vinculará al juez civil, pues el fundamento de dicha pretensión sería el hecho dañoso declarado inexistente en la vía penal¹⁰⁸.

En cuanto a la posibilidad de contradicción entre sentencias, incompatible con determinados preceptos de nuestra carta magna, viene al caso citar la STC de 28 de diciembre de 2.009 en tanto entiende que la existencia de pronunciamientos contradictorios sobre unos mismos hechos es incompatible tanto con el principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE, como con el derecho a la tutela judicial efectiva del 24.1 CE. A este respecto, de modo más concreto, la STC de 22 de septiembre de 2.008 dispone que no puede ser que unos mismos hechos existan para un órgano y no para otro, pues ello vulneraría los principios básicos de *lógica jurídica* y *extrajurídica*, a no ser que dicha contradicción emane del análisis de los mismos hechos desde puntos de vista jurídicos diferentes.

5.3.2. Conclusión del proceso penal con sentencia condenatoria. Cosa juzgada

En el caso de haber mediado reserva de acción civil y haber finalizado el proceso penal con sentencia condenatoria, el juez civil estará condicionado por los hechos declarados probados por el tribunal penal, pero no por la calificación jurídica de ellos. Ello responde al hecho de que los criterios y principios que rigen en el proceso penal distan de coincidir con los del proceso civil, el cual tiene como finalidad la reparación del daño¹⁰⁹.

Dicho de otro modo, la existencia de un delito declarada en sentencia penal no es vinculante para los tribunales, pues se entiende que el delito es una denominación jurídica

¹⁰⁸ PÉREZ CEBADERA, M. A., “Vida o muerte de la pretensión civil tras la absolución penal por inexistencia del hecho: Estados Unidos y España”, *Diario La Ley* Nº 6.868, 2.008.

¹⁰⁹ YZQUIERDO TOLSADA, M., *Aspectos civiles...*, op. cit., pág. 67.

de un hecho, vinculando al juez civil solo la declaración de hechos probados contenida en la resolución penal¹¹⁰. En este sentido se pronuncia la STS 3 de febrero de 2.016:

Los tribunales civiles deben partir de los hechos declarados probados por las resoluciones firmes dictadas por tribunales de la jurisdicción penal. Pero ello no impide que en cada jurisdicción haya de producirse un enjuiciamiento y una calificación en el plano jurídico de forma independiente y con resultados distintos si ello resulta de la aplicación de los criterios de valoración propios de una y otra jurisdicción y de los diferentes principios que informan el proceso civil y el proceso penal, o, más exactamente, el ejercicio privado de los derechos y el ejercicio del ius puniendi.

Por otro lado, en los casos en que no haya mediado reserva de acciones, dictándose en el proceso penal pronunciamiento sobre la responsabilidad civil del condenado penal, no podrá posteriormente el juez civil conocer sobre el mismo asunto del que ya ha conocido el juez penal¹¹¹, por razones de cosa juzgada material. Sin embargo, habrá determinados aspectos sobre los que sí pueda entrar a conocer el juez civil –siempre y cuando no lo haya hecho previamente el juez penal- pues la cosa juzgada está limitada a cuestiones en que coincidan los sujetos y las causas de pedir. Así por ejemplo, podría pronunciarse el juez civil sobre la atribución de responsabilidad a posibles responsables subsidiarios¹¹².

5.3.3. Conclusión del proceso penal por absolución o sobreseimiento

El fin del procedimiento penal con el resultado de sentencia absolutoria puede venir motivado por diferentes causas. Previamente, cabe advertir que algunas de estas causas deben conllevar la absolución de la condena civil, y otras en cambio no llevarán aparejada una exoneración del pago civil de modo automático, y ello en tanto el derecho que tiene el perjudicado no depende directamente de que el hecho sea delito sino de su ilicitud civil¹¹³. En este sentido, hay que señalar que la responsabilidad civil «*ex delicto*» solo será objeto de pronunciamiento en el procedimiento penal cuando exista una previa declaración de responsabilidad criminal, a excepción de los supuestos previstos en el art. 118 CP¹¹⁴.

¹¹⁰ BARONA VILAR, S., GÓMEZ COLOMER, J.L., MONTERO AROCA, J., MONTÓN REDONDO, A., *El nuevo proceso civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2.000, pág. 126.

¹¹¹ *Ibídem*.

¹¹² *Ibídem*.

¹¹³ PÉREZ CEBADERA, M. A., “Vida o muerte...”, *loc. cit*.

¹¹⁴ CALDERÓN MALDONADO, F. A., “La prescripción penal tras la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010”, *Diario La Ley* Nº 7.654, 2.011.

5.4. Plazo de prescripción y dies a quo

5.4.1. *Plazo de prescripción conforme a las distintas formas de finalización del procedimiento penal*

Entre los modos de extinción de la responsabilidad civil derivada del hecho delictivo podemos enunciar: pago, condonación y transacción, compensación y prescripción. Esta última, es de una importancia indudable en nuestro ordenamiento, situándose como principal cuestión problemática del tema objeto del presente trabajo.

Puesto que este tipo de responsabilidad civil emana, como ya ha quedado matizado, de los daños y perjuicios causados por el hecho potencialmente delictivo, y no directamente del delito ni de la pena impuesta a causa de éste, el plazo para exigir un tipo u otro de responsabilidad –civil o penal- responde a criterios y normas diferentes, si bien ante el silencio del Código Penal sobre este punto procede la remisión a nuestro Cc¹¹⁵.

Pues bien, dada la falta de precepto legal específico regulador de tal aspecto, la cuestión ha de abordarse desde un estudio eminentemente jurisprudencial. Dicho lo cual, la fijación de los distintos plazos de prescripción guarda estrecha conexión con la cuestión tratada en el epígrafe anterior, pues según se pronuncie la sentencia penal, dichos plazos se someterán a reglas diferentes. En este sentido, el tratamiento dado por la doctrina lejos está de aportar claridad y uniformidad al asunto, si bien en algunos puntos encontramos tesis mayoritarias que permiten asentar determinados principios al respecto. Así, los distintos supuestos a los que puede dar lugar el tema sobre la extinción de responsabilidad civil «*ex delicto*» son los siguientes:

5.4.1.1. *Sentencia penal condenatoria sin pronunciamiento sobre la responsabilidad civil por mediar reserva de la acción civil*

La mayoría de la doctrina opta por aplicar el plazo general de prescripción del art. 1.964 Cc previsto para las obligaciones personales sin término especial de prescripción, al considerar que no existe plazo específico regulador de tal efecto. Dicho plazo, tras la reforma introducida por la disp. final primera de la Ley 42/2015, de reforma de la LEC, se reduce de quince a cinco años. Este criterio ha venido siendo consolidado por la doctrina jurisprudencial, exponiendo a modo de ejemplo, STS 30 de abril de 2.007 la cual declara que al no establecer ninguna de las normas específicas de este tipo de responsabilidad un

¹¹⁵ JUAN SÁNCHEZ, R., “Nueva doctrina constitucional sobre la prescripción del delito y su incidencia en el ejercicio de la acción por responsabilidad *ex delicto*”, *InDret N° 1*, Barcelona, 2.009, pág. 9.

plazo de prescripción para el ejercicio de la acción, será de aplicación el genérico de las acciones personales, 15 años -actualmente 5-, del art. 1.964 Cc.

Puesto que se aplica a tal supuesto el plazo previsto de las acciones generales, parece claro que la mayoría de autores consideran que se trata de un tipo de responsabilidad diferente del resto de las previstas en nuestro ordenamiento. Sin embargo, encontramos una minoritaria doctrina, encabezada por YZQUIERDO TOLSADA, que considera que el plazo aplicable es el de 15 años y no el de un año previsto para la responsabilidad extracontractual pero no por razones de falta de plazo expreso. La razón de ello no es que la fuente de la obligación sea distinta a la extracontractual, -recordemos que para este autor la «*ex delicto*» está dentro de la extracontractual- si no que entiende que el sustento legal limitado para su fundamentación se encuentra en el art. 1.971 Cc, relativo al plazo de prescripción de 15 años para las obligaciones declaradas por sentencia. Pero no se conforma con ello, pues matiza asimismo que no se trata éste de un argumento enteramente coherente, ya que la sentencia penal no declara una obligación resarcitoria que sería la pretensión del posterior proceso civil, pues la fuente de la misma sería el hecho dañoso y no la sentencia penal anterior¹¹⁶. Y por otro lado, encontramos algunos autores, como PANTALEÓN PRIETO y SÁNCHEZ JORDAN, que consideran aplicable el plazo de prescripción de un año previsto para la responsabilidad extracontractual, por entender que ésta fundamenta la exigibilidad de los daños independientemente deriven de un hecho ilícito o un hecho civil¹¹⁷. Pero como digo, se trata de una opinión minoritaria, siendo criterio generalizado la aplicación del plazo general de 5 años del 1.964 Cc. Así, se deja a un lado el plazo de un año del 1.968.2 Cc, el cual regirá únicamente en aquellos casos en que el delito motivador de los daños sea relativo a injurias o calumnias pues a tal efecto se prevé el plazo específico de un año en el art. 1.968.2 Cc, concurriendo en estos casos criterio pacífico en la doctrina, pues el precepto no deja lugar a interpretaciones.

Por aclarar entonces, cuando exista una previa sentencia penal condenatoria que nada diga sobre la responsabilidad civil derivada del delito por mediar reserva de la acción civil, el plazo de prescripción a aplicar será el general de 5 años del art. 1.964 Cc,

¹¹⁶ YZQUIERDO TOLSADA, M., *Aspectos civiles...*, op. cit., págs. 62-63. Realiza dicha justificación tomando como referencia lo expuesto por REGLERO CAMPOS respecto del plazo del artículo 1.971 Cc.

¹¹⁷ SÁNCHEZ JORDÁN, M.E., “Problemas de la llamada...”, loc. cit., págs. 173 y 174.

justificándose dicho criterio mediante la diferenciación entre responsabilidad extracontractual del 1.902 Cc y responsabilidad civil «*ex delicto*»¹¹⁸.

5.4.1.2. *Sentencia penal condenatoria con pronunciamiento sobre la responsabilidad civil*

En estos supuestos la sala segunda del TS ha venido considerando que el plazo de prescripción de la responsabilidad civil deberá ser el mismo que el plazo de prescripción de la acción pública¹¹⁹, esto es, el plazo previsto para la acción penal, según el caso. Dicho lo cual, en los casos en que la responsabilidad civil «*ex delicto*» sea declarada por el mismo juez penal, el plazo será el previsto para el delito enjuiciado. En contra de esta opinión, se pronuncia otra parte de la doctrina partidaria de aplicar el plazo general del art. 1.964 Cc tanto si se reclama la responsabilidad civil ante la jurisdicción penal, como si se hace ante la jurisdicción civil¹²⁰.

5.4.1.3. *Sentencia penal no condenatoria*

Las causas motivadoras de la absolución en el proceso penal pueden ser diversas, haciéndose necesario determinar de forma clara cuál es dicha causa a la hora de aplicar un plazo u otro de prescripción. Así, dentro de los supuestos con previa sentencia penal absolutoria distinguimos los siguientes:

- Sentencia penal absolutoria con declaración de inexistencia de hechos:

Poco requiere decirse al respecto, pues como se ha abordado en el apartado anterior, en estos casos el tribunal civil, en aras de garantizar la congruencia con la sentencia penal, exonerará de responsabilidad civil a la parte demandada, de modo que no entrará el pertinente tribunal en la determinación del plazo de prescripción de la subsiguiente acción civil.

- Sentencia penal absolutoria con declaración de los hechos enjuiciados como no constitutivos de delito:

En estos casos se aplica el plazo de prescripción de un año previsto en el art. 1.968.2 Cc, y ello es lógico puesto que redirigiríamos la situación a un supuesto de responsabilidad extracontractual fundada en el 1.902 Cc. Es decir, existen unos daños

¹¹⁸ JUAN SÁNCHEZ, R., “Nueva doctrina constitucional...”, *loc. cit.*, pág. 9. Refuerza su argumento el autor mediante la explicación del contenido de la STS 27 julio 2.008.

¹¹⁹ NAVARRO MENDIZÁBAL, I.A. y VEIGA COPO, A.B., *Derecho de daños*, *op. cit.* pág. 57.

¹²⁰ ROCA DE AGAPITO, L., “La prescripción...”, *loc. cit.*, pág. 5.

derivados de unos hechos los cuales el tribunal penal entiende que no pueden subsumirse en ninguno de los tipos del Código Penal. No existiendo delito, los daños producidos derivan de una conducta encuadrada en el tipo de la responsabilidad civil extracontractual. En tal sentido se pronuncia la STS 6 de marzo de 2.008, al declarar que no habiéndose ejercitado en aquella ocasión la acción de responsabilidad civil subsidiaria surgida de ilícito penal carece de sentido someter la prescripción extintiva al plazo general del art. 1.964 Cc.

- Sentencia penal absolutoria por causas de inimputabilidad o causas sobrevenidas:

Las posibles causas de exención de responsabilidad penal -como los supuestos de inimputabilidad del infractor- no conllevan generalmente la exención de responsabilidad civil, pues ésta a priori se mantiene. En dichas situaciones rige el plazo general del 1.964 Cc. Sin embargo, algunos autores ajenos a tal afirmación, consideran aplicable el plazo de un año del 1968.2 Cc por entender que en estos casos no se trata de una responsabilidad civil «*ex delicto*». Pero si hemos dicho que no es requisito *sine qua non* para el nacimiento de la responsabilidad civil «*ex delicto*» la preexistencia de condena penal, ¿cómo se explica ahora que la absolución de responsabilidad penal haga desaparecer el carácter «*ex delicto*» de la responsabilidad civil? Se antoja necesario el esclarecimiento de la presente cuestión mediante la explicación ofrecida por la STS 27 de marzo de 2.015, que tiene por objeto la reclamación de los daños derivados de un delito de abusos sexuales previamente había enjuiciado ante un tribunal penal, con el resultado de archivo provisional de la causa, hasta que recobrase la salud el acusado, y con expresa reserva de acciones civiles a favor de la víctima. Entiende el tribunal que la acción ejercitada estaba prescrita porque al no existir previa condena penal, el plazo a aplicar debía ser el de un año del art. 1.968 Cc previsto para la responsabilidad extracontractual.

Por otro lado, cuando las circunstancias sobrevenidas fueren la concesión del indulto o el fallecimiento del acusado, se decanta la doctrina de nuestro alto tribunal por aplicar el plazo general de 5 años¹²¹.

¹²¹ QUINTERO OLIVARES, G., CAVANILLAS MÚGICA, S., DE LLERA SUÁREZ-BARCENA, E., *La responsabilidad civil...*, op. cit., pág. 136.

5.4.1.4. Supuestos de ejecución de la condena de responsabilidad civil «*ex delicto*»

Es necesario establecer un plazo para interponer la acción ejecutiva dirigida a reclamar el *quantum* fijado en cada caso por el tribunal como condena de los responsables a reparar los daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil «*ex delicto*». Dicha obligación de pago puede haberla fijado tribunal civil o un tribunal penal. Cuando recae sentencia de condena y es firme, ésta constituye título ejecutivo para la responsabilidad civil en ella declarada y actúa como autónoma de la condena penal, y siendo esto así, no hablamos de prescripción de la acción de responsabilidad civil si no que entran en juego las acciones ejecutivas dirigidas a exigir su cumplimiento¹²². Pues bien, en caso de dictarse sentencia civil condenatoria estimando la acción de responsabilidad civil «*ex delicto*» o resolución judicial que apruebe u homologue transacciones o acuerdos judiciales, el plazo aplicable será el de caducidad –que no prescripción– previsto en el art. 518 LEC: 5 años desde la firmeza de la sentencia o resolución. En cambio, cuando la condena civil haya sido reconocida en sentencia penal, la ejecución es instada de oficio por el mismo tribunal penal, y el plazo de prescripción de su acción ejecutiva será de 5 años, pero no por aplicación del 518 LEC si no por el plazo general del 1.964 Cc¹²³. En este sentido, habrá que diferenciar entonces de modo claro entre prescripción del ejercicio de la acción civil y la caducidad del ejercicio de la acción ejecutiva, y ello porque dicha diferenciación se torna de importancia según la condena al pago de este tipo de responsabilidad haya sido dictada por tribunal civil o penal, pues si el órgano encargado de dictar sentencia ha sido el tribunal penal, no tiene cabida aquí la institución de la caducidad de la acción ejecutiva, si no que lo que podría darse es la prescripción de la responsabilidad civil por transcurso del tiempo desde que se paralizó la ejecución, motivada por ejemplo por la declaración de insolvencia del responsable¹²⁴.

En conclusión, por regla general, el plazo de prescripción para ejercitar la acción de responsabilidad civil subsiguiente al ilícito penal es, tal como expone la mayor parte de la doctrina y jurisprudencia, el plazo previsto en el art. 1.964 Cc. La reforma de dicho plazo introducida en 2.015 ha tenido gran importancia en relación con el tema objeto del trabajo, y motivo de crítica para algunos autores. La reducción del plazo de 15 a 5 años hace que el plazo para exigir la responsabilidad civil «*ex delicto*» pueda prescribir con

¹²² JIMÉNEZ PARÍS, J. M., “Solución interpretativa a la posible prescripción de la responsabilidad civil (artículo 1964 CC) declarada en sentencia firme por la comisión de un delito”, *Diario La Ley* n° 8.693, 2.016.

¹²³ RUIZ BOSCH, S., “La prescripción de la...”, *loc. cit.*

¹²⁴ ROCA DE AGAPITO, L., “La prescripción...”, *loc. cit.*

anterioridad a la prescripción del delito de la que emana, pues si bien dicho plazo se interrumpiría por el curso del proceso penal, si no hay tal proceso penal, la interrupción no se llevaría a efecto. Esto es, para todos los delitos cuyo plazo de prescripción sea superior a 5 años, la responsabilidad civil derivada de ellos prescribiría antes incluso que la responsabilidad penal de dichos delitos. Y ello es paradójico puesto que choca con la idea mantenida a lo largo de todo el trabajo de que la responsabilidad civil se centra en el beneficio de la víctima, a diferencia de la penal que se centra en la sanción y reinserción del infractor. En este sentido cabe decir además, que precisamente este hecho se dará en los casos de todos los delitos graves –que si bien los daños civiles producidos por ellos no tienen por qué ser los más graves, generalmente lo serán-. Dispone el art. 131.1 CP que los delitos prescribirán, según sea su máxima pena de prisión prevista, a los 20 años –ej. asesinato (139 CP)-, a los 15 años –ej. violación (179 CP)-, a los 10 años –ej. malversación (art. 432 CP), a los 5 años –ej. hurto (234 CP), o al año los delitos leves y las injurias o calumnias, siendo este último plazo el único en que el legislador no solo respeta, si no que hace coincidir el plazo de prescripción de responsabilidad civil y penal. Prevé el CP que los delitos de lesa humanidad, genocidio y terrorismo no prescribirían en ningún caso, lo que lleva a preguntarse entonces si no podrá reclamarse la responsabilidad civil derivada de esos delitos una vez transcurrido el plazo de prescripción de 5 años del 1.964 Cc. Una posible solución podría resultar ser que para los casos en que exista condena a responsabilidad penal, vuelva a computarse desde dicho momento el plazo de prescripción de 5 años para exigir la responsabilidad civil «*ex delicto*».

Puede resultar acertada la solución ofrecida por ROCA DE AGAPITO, quien apuesta por, o bien regular expresamente su plazo de prescripción, o bien equiparar el plazo de ejercicio de la acción civil derivada de un hecho delictivo al plazo de prescripción del delito que la origine, interpretando la remisión del Cc al CP como también referida al plazo de prescripción. Pero a tal respecto señala DÍEZ PICAZO que si hubiera querido el legislador que prescribieran las responsabilidades civiles con los delitos lo hubiera especificado en el CP¹²⁵.

5.4.2. *Dies a quo e interrupción del plazo de prescripción*

La regla general por excelencia relativa al *dies a quo* o inicio del cómputo del plazo de prescripción de la responsabilidad civil se regula en el art. 1.969 Cc, que establece que *el*

¹²⁵ DÍEZ PICAZO, L., *La prescripción el Código Civil*, al que se hace referencia en SÁNCHEZ JORDÁN, M.E., “Problemas de la...”, *loc. cit.*, pág. 173.

tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse. La cuestión problemática se sitúa entonces en determinar cuál es el momento a partir del cuál la acción para exigir la responsabilidad civil subsiguiente al ilícito penal pudiere ejercitarse. Teniendo en cuenta dicho precepto, hay autores que señalan que el *dies a quo* sería la fecha en que se produjeron los hechos potencialmente delictivos¹²⁶. Pero pueden darse casos en que los daños civiles derivados de los hechos delictivos no puedan conocerse hasta pasado un tiempo desde la comisión del delito, y dicha afirmación anterior dejaría en cierta situación de indefensión a la víctima.

Por otro lado, en aras de mantener la concordancia con el argumento de líneas anteriores en relación con el criterio *le criminel tient le civil en état* habrá de aplicarse el art. 114 LECrim y así, en los casos en que la acción civil derivada de un hecho criminal no sea resuelta en el proceso penal, no podrá ejercitarse la acción civil sino desde la finalización del proceso penal. Es en dicho sentido en el que se pronuncia la STS 6 de marzo de 2.008¹²⁷. Pero la solución no es tan simple como fijar el momento en la finalización del proceso penal, pues exige la doctrina constitucional como elemento determinante que la finalización del proceso penal se comunique a los sujetos potencialmente legitimados para ejercitar la acción civil¹²⁸. Más exactamente, conforme a la mayoría de resoluciones de los tribunales, debe fijarse como *dies a quo* el día siguiente a la notificación de la sentencia judicial en vía penal¹²⁹. En este sentido, afirma la STS de 25 de abril de 2.013 que el día inicial para el ejercicio de la acción es aquel en que puede ejercitarse según el principio *actio nondum nata non praescribitur*, por lo que el plazo de prescripción no puede comenzar a computarse hasta que el interesado no cuente con los elementos fácticos y jurídicos que sirvan de base para fundamentar su acción ante los tribunales¹³⁰. A este respecto, la STS 24 de mayo de 2.010 declara que el *dies a quo* debe situarse en el momento en que adquiere firmeza la sentencia penal recaída o el auto de sobreseimiento pues es en dicho instante cuando se conoce el punto final de la paralización operada por el proceso penal y la correlativa posibilidad de actuar en vía civil.

¹²⁶ ROCA DE AGAPITO, L., “La prescripción...” *loc. cit.*

¹²⁷ JUAN SÁNCHEZ, R., “Nueva doctrina constitucional...”, *loc. cit.*, pág. 12.

¹²⁸ *Ibidem.*

¹²⁹ ROCA DE AGAPITO, L., “La prescripción...”, *loc. cit.*

¹³⁰ *Ibidem.*

6. CONCLUSIONES

PRIMERA. La responsabilidad civil derivada del hecho delictivo tiene como finalidad la reparación civil de los daños irrogados a las víctimas, situándose así como una consecuencia jurídica del delito –si bien no directa- cuyo fundamento es satisfacer las necesidades de las víctimas de los delitos, siendo éste el principal fundamento de la atribución de naturaleza civil a la institución.

Razones históricas y motivos de economía procesal justifican la posibilidad de elección a la hora de ejercitar la acción para exigir tal responsabilidad ante los tribunales penales y civiles. Ello explica a su vez su ubicación legal dual, sin olvidar el hecho de que uno de sus principales presupuestos es la producción de una acción u omisión con apariencia delictiva. Se trata en definitiva de una institución de naturaleza jurídica civil en la que tienen enorme trascendencia diversos aspectos penales.

SEGUNDA. Las controversias de carácter dogmático en torno al concepto, presupuestos y fundamentación de la institución tienen clara proyección en las cuestiones problemáticas prácticas tratadas en este trabajo. Dicho lo cual, cabe señalar que los debates surgidos en la praxis son reflejo de la técnica tradicional de nuestro sistema a la hora de regular este tipo de responsabilidad. A lo anterior se suma la falta de uniformidad de criterios sobre la fijación de su origen, cuestionándose si dicho momento se sitúa en la producción del hecho delictivo, en los daños de él emanados, en la sentencia de condena penal, o bien en la notificación de dicho pronunciamiento a la víctima.

Pese a las opiniones disidentes al sistema español en cuanto a tal regulación, la posibilidad del juez penal de fijar en su pronunciamiento tanto la condena penal como la civil de ella derivada, ha venido siendo una de las propuestas de política jurídica dirigida al resto de países desde instancias internacionales.

A mayor abundamiento, la regulación española que posibilita la elección del perjudicado a la hora de ejercer sus derechos es coherente con el fundamento de la responsabilidad civil «*ex delicto*», centrada en la satisfacción de la víctima.

TERCERA. En cuanto al contenido material de este tipo de responsabilidad -restitución, reparación e indemnización-, su satisfacción no siempre será posible. Y ello, dado que la reparación depende del tipo de delito. Así, cuando el bien jurídico protegido no es el patrimonio o el orden socio económico, será prácticamente imposible retornar a la víctima a la situación anterior a la producción de la acción; de forma que lo único que

se puede lograr es la compensación económica de los daños mediante la indemnización. Este hecho justifica que, pese a tratarse de tres conceptos diferenciados por el legislador, hayan venido siendo equiparados por la jurisprudencia, entendiéndolos englobados en la categoría de reparación en sentido amplio.

CUARTA. Las reformas normativas producidas recientemente tienen enorme trascendencia en las cuestiones prácticas abordadas. A este respecto cabe destacar la reducción del plazo general de prescripción de las acciones personales. Como se ha podido observar, dicho plazo ha sido mayoritariamente apuntado como criterio aplicable a la responsabilidad civil derivada del delito, y ello desvirtúa la idea de considerarla incluida en la modalidad de extracontractual. Sin embargo, sobre este punto surgen opiniones que entienden que, por derivar ambos tipos de responsabilidad del daño y por buscar ambas la misma finalidad, no cabría diferenciación entre la «*ex delicto*» y la civil pura. Algunos de los partidarios de tal afirmación, reticentes a aplicar el corto plazo prescriptivo de un año previsto para la extracontractual, interpretan el precepto de forma restrictiva con el fin de dejar en mejor situación a la víctima del delito. Esto implica una especie de flexibilización de criterios imperativos no asumible en nuestro ordenamiento, pues se pone en tela de juicio la garantía del principio de legalidad y seguridad jurídica imperantes en nuestro sistema jurídico. En definitiva, el plazo de prescripción aplicable es el general de 5 años, dejándose a un lado la equiparación terminológica de ambos tipos de responsabilidad.

QUINTA. Una vez fijado el deslinde entre las finalidades propias del Derecho Penal y las del Civil, cabe destacar que la responsabilidad civil «*ex delicto*» ha sido posiblemente la que ha servido de inspiración al legislador para regular la atribución de responsabilidad penal a la personas jurídicas. Y ello porque dicha condena penal se justifica mediante criterios más afines a la responsabilidad civil, alejándose de los principios penales clásicos. La contraposición entre los tradicionales principios penales y los civiles pone de manifiesto la necesidad de renovación de las interpretaciones jurídicas, adecuándolas a los problemas jurídicos actuales.

SEXTA. Resulta sorprendente que, pese a abarcar diferentes ramas del Derecho, no haya sido una materia analizada en profundidad desde ninguna en concreto. Se puede decir que se halla en terreno de todos y realmente de nadie. Y ello no es baladí, pues los problemas prácticos surgidos son de gran alcance para los intereses de la sociedad, y los mismos se resolverán de una forma u otra dependiendo de los criterios utilizados. Ello

provoca una incertidumbre jurídica alejada de los principios de nuestro ordenamiento jurídico.

A modo de ejemplo, supongamos que un determinado sujeto provoca unos daños en nuestro vehículo. A priori, dicho hecho podría englobarse en la categoría de responsabilidad extracontractual, con sujeción al plazo de prescripción de un año. Pero, se trata de un acción situada en la fina línea entre extracontractual y «*ex delicto*». ¿Qué ocurriría si no se reclaman los daños en vía civil y años más tarde se acude a la vía penal por considerar que el sujeto actuó dolosamente y la acción constituye delito de daños? ¿Podría alegar el infractor que la acción está prescrita por el transcurso de plazo de un año de la extracontractual?, ¿o podría alegar la víctima que no está prescrita por aplicación del plazo de 5 años? ¿Nos encontraríamos ante el extraño caso de volver a computar un nuevo plazo de prescripción tras haberse convertido la extracontractual en «*ex delicto*»?

Como se puede observar, resulta necesario aunar esfuerzos en unificar criterios que aporten mayor claridad a este tipo de cuestiones para acabar con el debate doctrinal.

SÉPTIMA. Con todo, la responsabilidad civil consecuencia de ilícito penal es una institución insólita en nuestro ordenamiento, en la que necesariamente confluyen aspectos de Derecho Civil y Derecho Penal. Este hecho dota de carácter multidisciplinar a la misma, situándola como una figura jurídica particularmente compleja, y constituyendo dicha peculiaridad la esencia del presente trabajo.

7. JURISPRUDENCIA

TRIBUNAL SUPREMO:

STS 8 noviembre 2.016.....	RJ 2016/5406
STS 29 febrero 2.016.....	RJ 2016/600
STS 3 febrero 2.016.....	RJ 2016/1
STS 18 octubre 2.015.....	ROJ 4342/2015
STS 30 junio 2.015.....	ROJ 3177/2015
STS 27 marzo 2.015.....	RJ 2015/2688
STS 25 abril 2.013.....	RJ 2013/3389
STS 20 febrero 2.013.....	RJ 2013/2025
STS 13 septiembre 2.010.....	RJ 2010/6969
STS 24 mayo 2.010.....	RJ 2010/3714
STS 6 marzo 2.008.....	RJ 2008/2938
STS 30 abril 2.007.....	RJ 2007/4726
STS 24 septiembre 2.002.....	RJ 2002/9008
STS 12 noviembre 2.001.....	RJ 2001/9701
STS 4 julio 2.000.....	RJ 2000/5924
STS 27 junio 2.000.....	RJ 2000/5804
STS 18 marzo 2.000.....	RJ 2000/1475

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

STC 28 diciembre 2.009.....	RTC 2009/192
STC 22 septiembre 2008.....	RTC 109/2008

AUDIENCIAS PROVINCIALES:

SAP La Rioja 8 enero 2.015.....	ARP 2015/112
SAP Burgos 14 julio 2.010.....	JUR 2010/296329
SAP Álava 27 mayo 2.005.....	AC 2005/1062
SAP Cantabria 23 diciembre 2.003.....	ARP 2015/584

8. BIBLIOGRAFÍA

- ALBERT PÉREZ, S., *Sistema de responsabilidad civil derivada de delito cometido por menores de edad: exigencia de responsabilidad civil de menores. Jurisdicción civil y jurisdicción contenciosa*, Comares, Granada, 2.007.
- BARONA VILAR, S., GÓMEZ COLOMER, J.L., MONTERO AROCA, J., MONTÓN REDONDO, A., *El nuevo proceso civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2.000.
- BERROCAL LANZAROT, A.I., “La comunidad educativa ante el acoso escolar o *bullying*. La responsabilidad civil de los centros docentes”, *Diario La Ley* Nº 7.359, 2.010.
- CALDERÓN MALDONADO, F.A., “La prescripción penal tras la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010”, *Diario La Ley* Nº 7.654, 2.011.
- CALZADA GONZÁLEZ, A., CAMACHO DE LOS RÍOS, F., (Coords.), *El derecho penal: de Roma al derecho actual*, Edisofer, Madrid, 2.005.
- DE LA FUENTE HONDARRUBIA, F., “La responsabilidad civil del delito. Especial consideración de las personas jurídicas y entes jurídicos colectivos”, *AFDUA*, 2.003, págs. 228-247.
- DÍAZ ALABART, S., “La responsabilidad en la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de menores”, *Responsa Iurisperitorum Digesta vol. II*, 2.000, págs. 185-222.
- DÍAZ MARTÍNEZ, M., “El régimen especial de la responsabilidad civil en el proceso penal de menores”, *Diario La Ley* Nº 6.515, 2.006.
- DURANY PICH, S., “Las reglas de responsabilidad civil en el nuevo Derecho Penal de menores”, *InDret* nº 2, 2.000.
- FERNÁNDEZ CRENDE, A., “Imputación objetiva en un caso de responsabilidad civil ex delicto: criterio de la provocación: Comentario a la STS, 2ª, 26.9.2005”, *InDret* nº 1, 2.006, Barcelona.
- FIGUEROA NAVARRO, C., “Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2011 relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del CP efectuada por la LO 5/2010”, *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, vol. LXIV, 2.011, págs. 397-524.
- GALIANA URIARTE, F., “Problemas de la responsabilidad delictual: el tercero perjudicado”, *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, T. 19, 1.996, págs. 199-214.
- GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P.M., “Tratamiento procesal de la responsabilidad civil en el proceso penal de menores tras la reforma de 2006: reflexiones a la luz de la circular de la Fiscalía general del Estado 1/2007, de 26 de noviembre”, *REDUR* nº 5, 2.007, págs. 25-41.
- GÓMEZ COLOMER, J.L., con MONTERO AROCA, J. y otros, *El nuevo proceso civil (L 1/2000)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2.000.

- GÓMEZ TOMILLO, M., *Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema español*, Lex Nova, Valladolid, 2.010.
- GONZÁLEZ-ALEGRE BERNARDO, M., “La responsabilidad civil en el proceso penal; algunos ejemplos prácticos de su evaluación a través de sentencias de Audiencia Provincial de Albacete” *Anales de la Universidad de Murcia*, vol. XVII, nº 3, 1.980, págs. 221-245.
- GONZÁLEZ TIMOTEO, A., LÓPEZ-MANZANARES SOMOZA, A., “Doctrina jurisprudencial de la Sala Primera. Cuestiones procesales LEC 2.000” *Informe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo Sala Primera*, 2.011. Disponible en <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Actividad-del-TS/Estudios/Doctrina-jurisprudencial-de-la-Sala-Primera--Cuestiones-Procesales-LEC-2000>.
- GRANADOS PÉREZ, C, *Responsabilidad civil ex delicto*, La Ley, Madrid, 2.010.
- HALLEBEEK J., “Cumplimiento forzoso de las obligaciones de hacer. Dos ejemplos de la tradición romanística”, *Glossae: European Journal of Legal History* nº 10, 2.013, págs. 215-225.
- HERNÁNDEZ ARRANZ, M., “El «caso Bankia» ante la jurisdicción civil: apuntes de jurisprudencia”, *Diario La Ley* Nº 8.664, 2.016.
- HORTAL IBARRA, J., “La naturaleza jurídica de la responsabilidad civil ex delicto: o cómo “resolver” la cuadratura del círculo”, *InDret* nº 4, 2.014.
- JUAN SÁNCHEZ, R., “Nueva doctrina constitucional sobre la prescripción del delito y su incidencia en el ejercicio de la acción por responsabilidad *ex delicto*”, *InDret* Nº 1, Barcelona, 2.009.
- JIMÉNEZ PARÍS, J. M., “Solución interpretativa a la posible prescripción de la responsabilidad civil (artículo 1964 CC) declarada en sentencia firme por la comisión de un delito”, *Diario La Ley* Nº 8.693, 2.016.
- LARA ORTIZ, M. L., “Responsabilidad civil derivada de delito, ¿base para la construcción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas?”. *Documentos de Trabajo. Seminario Permanente de Ciencias Sociales* Nº 4, 2.013, págs. 1-79.
- LLAMAS POMBO, E., *Estudios de derecho de obligaciones*, La Ley, Madrid, 2.006.
- LÓPEZ GUIZÁN, A., “La cosa juzgada”, *Revista de Derecho UNED* Nº 5, 2.009, págs. 513-523.
- MÁRQUEZ DE PRADO PÉREZ, J., *Responsabilidad civil “ex delicto”*, Consejo General del Poder Judicial: Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 2005.
- MARTÍN PASTOR, J., “Amparo constitucional por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) en relación con el derecho a la libertad personal (artículo 17.1 CE), y su incidencia sobre la responsabilidad civil ex delicto (A propósito de la sentencia de la Sala 2.ª del Tribunal Constitucional, núm. 29/2008, de 20 de febrero, y de la sentencia de la Sala del Tribunal Supremo, núm. 430/2008, de 25 de junio)”, *Diario La Ley* Nº 7.144, 2.009.

- MARTÍN RÍOS, M.P., *El ejercicio de la acción civil en el proceso penal: una aproximación victimológica*, La Ley, Madrid, 2.007.
- MORENO MARTÍNEZ, J.A., *Daños indirectos de familiares y terceros por causa de lesiones*, Aranzadi, Pamplona, 2.012.
- MORENO MARTÍNEZ, J. A. (coord.) *et al.*, *La responsabilidad civil y su problemática actual*, Madrid, Dykinson, 2.007.
- NAVARRO MENDIZÁBAL, I.A., VEIGA COPO, A.B., *Derecho de daños*, Civitas, Pamplona, 2.013.
- NAVARRO MENDIZÁBAL, I.A., “La responsabilidad civil en la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor”, *ICADE Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales* n.º. 53, Madrid, 2.001, págs. 121-163.
- NEIRA PENA, A.M., “La aplicación jurisprudencial de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Reflexiones sobre la STS 154/2016, de 29 de febrero, primera sentencia de condena del TS frente a una persona jurídica”, *Diario La Ley* N.º 8.736, 2.016.
- PALOMAR OLMEDA, A. (dir.), *Practicum Ejercicio de la Abogacía 2.016*, Aranzadi, Navarra, 2.015.
- PALOMO HERRERO, Y., “La pretensión civil deducible en el proceso penal”, *Revista Jurídica de Castilla y León* N.º 14, 2.008, págs. 293-334.
- PÉREZ CEBADERA, M.A., “Vida o muerte de la pretensión civil tras la absolución penal por inexistencia del hecho: Estados Unidos y España”, *Diario La Ley* N.º 6.868, 2.008.
- PÉREZ VALLEJO, A.M., “El complejo régimen que disciplina la responsabilidad civil por daños derivados del acoso escolar”, *Análisis jurídico y cuantitativo de la violencia en la infancia y adolescencia: propuestas de intervención socio-legal*, ADC LXVIII, 2.015, págs. 1387-1452.
- PINTOS AGER, J., *Baremos, seguros y Derecho de daños*, Civitas, Madrid, 2.000.
- QUINTERO OLIVARES, G., CAVANILLAS MÚGICA, S., DE LLERA SUÁREZ-BARCENA, E., *La responsabilidad civil «ex delicto»*, Aranzadi, Cizur Menor, 2.002.
- RAMÓN FERNÁNDEZ, F., “La responsabilidad civil en el ámbito de los menores”, *Revista sobre la infancia y la adolescencia* N.º 3, 2.012, págs. 2-23.
- REGLERO CAMPOS (coord.), *Tratado de responsabilidad civil I*, Aranzadi, Cizur Menor, 2.008
- ROCA DE AGAPITO, L., “La prescripción de la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Valoración crítica de la Ley 42/2.015, de 5 de octubre”, *Diario La Ley* n.º 8.675, 2.016.

- ROJAS RAMÍREZ, G., “La responsabilidad civil derivada del delito”, *GestioPolis*, 2.014. Disponible en <http://www.gestiopolis.com/la-responsabilidad-civil-derivada-del-delito/>.
- RUIZ BOSCH, S., “La prescripción de la responsabilidad civil derivada del delito”, *Noticias Jurídicas*. Disponible en <http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4876-la-prescripcion-de-la-responsabilidad-civil-derivada-del-delito>.
- SAGÜILLO TEJERINA, E., “Algunas cuestiones procedimentales sobre la exigencia de responsabilidad civil en el proceso penal contra menores”, *Diario La Ley* Nº 8.695, 2.016.
- SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, M.B., *La reparación del daño ex delicto. Entre la pena privada y la mera compensación*, Comares, Granada, 1.997.
- SAMPEDRO ARRUBIA, J.A., “¿Quiénes son las víctimas del delito? La redefinición del concepto desde la victimología”, *Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas*, vol. 21, Nº 67, 1.999, págs. 151-168.
- SÁNCHEZ JORDÁN, M.E., “Problemas de la responsabilidad civil “por delito””, *Revista jurídica de Navarra*, Nº 11, 1.991 págs. 159-178.
- SILVA SÁNCHEZ, J.M., “¿”Ex delicto”? aspectos de la llamada “responsabilidad civil” en el proceso penal”, *InDret* nº 3, Barcelona, 2.001.
- TAPIA FERNÁNDEZ, I., LÓPEZ SIMÓ, F., *Lecciones de Derecho Procesal Vol. III*, Treballs, Palma de Mallorca, 2.009.
- VELASCO NÚÑEZ, E., “Los delitos informáticos”, *Cuadernos Penales José María Lidón* Nº 12, Bilbao, 2.016, págs. 377-407.
- VIDAL FERNÁNDEZ, B., “Reparación de las víctimas del delito en la Unión Europea: tutela por el Tribunal de Justicia de la UE del derecho a la indemnización”, *Revista de estudios europeos* nº 66, 2.015, págs. 1-24.
- YZQUIERDO TOLSADA, M., *Aspectos civiles del nuevo Código Penal: responsabilidad civil, tutela del derecho de crédito, aspectos de derecho de familia y otros extremos*, Dykinson, Madrid, 1.997.
- ZUBIRI DE SALINAS, F., “Responsables civiles en el Código Penal”, *Jueces para la democracia* nº 25, 1.996, págs. 61-66.